

LEGISLACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE ESPECIES EN EXTINCIÓN.  
Parque Natural Nacional de los Nevados

JHON FREDY TORO BARCO

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA  
FACULTAD DE DERECHO  
PEREIRA  
2007

LEGISLACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE ESPECIES EN EXTINCIÓN.  
Parque Natural Nacional de los Nevados

JHON FREDY TORO BARCO

Proyecto de tesis monográfica presentada como requisito para optar el título de  
abogado.

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA  
FACULTAD DE DERECHO  
PEREIRA  
2007

NOTA DE ACEPTACIÓN:

---

---

---

---

---

---

Firma del presidente del jurado

---

Firma del jurado

---

Firma del jurado

## CONTENIDO

|  | Pag. |
|--|------|
| 1-. RESUMEN.   | 1    |
| 2.- INTRODUCCIÓN   | 4    |
| 3-OBJETIVOS  | 7    |
| 3.1- Objetivo General  | 7    |
| 3.2- Objetivos Específicos   | 7    |
| 4.-JUSTIFICACIÓN   | 9    |
| 4.1- Hipótesis   | 11   |
| 4.2- - Principales Efectos Socio jurídicos.                                      | 11   |
| 4.3- Marco Conceptual  | 15   |
| 4.4- Marco Demográfico   | 17   |
| 4.5-.Marco Geográfico  | 17   |
| 5.- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. VIVIENDA Y<br>DESARROLLO TERRITORIAL.         | 18   |
| 5.1.- Dirección de Ecosistemas   | 18   |
| 5.2.- Sistema Nacional Ambiental (SINA)  | 24   |
| 5.3.- Comercio Internacional de Especies<br>Amenazadas de Fauna y Flora –CITES.  | 25   |
| 6- DERECHO DE LA FAUNA: DIMENSIONES<br>INTERNACIONALES Y NACIONALES              | 28   |
| 6.1.-Antecedentes y Vínculos entre leyes locales<br>nacionales e internacionales | 28   |
| 6.2.-Panorama de los principales acuerdos internacionales                        | 32   |
| 6.3.-Legislación y jurisprudencia de la Comunidad Europea                        | 36   |
| 6.4.-La Directiva de Hábitats  | 37   |

|   |     |
|---|-----|
| 6.5.-Decisiones del Tribunal de Justicia de las<br>Comunidades Europeas       | 38  |
| 7-. PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN DE LA FAUNA                                       | 41  |
| 7.1.-Restricciones de la caza   | 41  |
| 7.2.-Protección de especies específicas                                       | 44  |
| 7.3.-Evaluación de los procesos perjudiciales                                 | 48  |
| 7.4.-Protección de la biodiversidad   | 50  |
| 7.5.-Planificación de la ordenación   | 52  |
| 7.6.-Reglamentación de la caza  | 55  |
| 7.7.- Utilización de licencias  | 58  |
| 7.8.- Otros tipos de licencias  | 59  |
| 7.9.-Otras finalidades de las licencias                                       | 61  |
| 7.10.- Cría y reproducción de los animales silvestres                         | 61  |
| 8- PROPIEDAD DE LA FAUNA Y DERECHOS<br>Y OBLIGACIONES CONEXOS                 | 65  |
| 8.1.- Medidas de protección fuera de las áreas protegidas                     | 67  |
| 9-. LEGISLACIÓN EXAMINADA SOBRE PROTECCION<br>DE ESPECIES EN VIA DE EXTINCIÓN | 69  |
| 10.- MARCO LEGAL DE LA PROTECCION<br>DE ESPECIES EN COLOMBIA                  | 77  |
| 11.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   | 79  |
| 12.-ANEXO   | 83  |
| JURISPRUDENCIA SOBRE LA PROTECCIÓN DE ESPECIES                                | 83  |
| BIBLIOGRAFÍA  | 124 |

# **LEGISLACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE ESPECIES EN EXTINCIÓN.**

## **Parque Natural Nacional de los Nevados**

### **1-. RESUMEN.**

En los últimos años, países de todo el mundo han realizado una exhaustiva revisión de su vigente legislación en materia de fauna o han adoptado nuevos marcos jurídicos para la ordenación y protección de la vida silvestre. El propósito del presente estudio es evaluar la situación actual de las leyes nacionales sobre la fauna en el mundo, con particular atención a las nuevas leyes y a las innovaciones jurídicas que se han adoptado en el último decenio y centrarnos a las que competen al Parque Nacional Natural Los Nevados.

La legislación examinada abarca leyes que se ocupan concretamente de la fauna y la caza, así como disposiciones de utilidad incluidas en leyes concernientes a otras materias, como las áreas protegidas, los bosques, la biodiversidad y el medio ambiente. Cuando procede, también se hace referencia a instrumentos legales locales en los casos en que las competencias en materia de ordenación de la fauna se hayan transferido en parte o totalmente a los gobiernos locales.

Habida cuenta de la amplitud de la materia en examen, el presente estudio no pretende representar un examen exhaustivo de todas las leyes pertinentes que están vigentes en los países abarcados. Más bien determina las principales tendencias discernibles en la legislación relativa a la fauna silvestre - así como las excepciones más destacadas - mediante el examen de las leyes de una muestra representativa de países.

Con este proceso, se evalúa la forma en que la legislación vigente aborda los temas centrales relacionadas con la fauna y sus hábitats, a saber:

1- Ordenación y protección de los animales salvajes mediante el uso de instrumentos de planificación, reglamentos de caza, requisitos para la concesión de licencias y control de la cría y reproducción de los animales de caza.

2- propiedad de la fauna silvestre y derechos y obligaciones conexos, incluida la indemnización en caso de daños causados por los animales y el balance entre los derechos de los cazadores y los de los propietarios de la tierra en que viven los animales.

3.- áreas protegidas, comprendidas las disposiciones sobre protección de las zonas vecinas y la relación entre la protección de la vida silvestre y otras formas de aprovechamiento de la tierra.

4.- Participación, facilitada por las instituciones, en la toma de decisiones relacionadas con la fauna silvestre y en los beneficios económicos resultantes, incluidos los mecanismos de consulta, los órganos representativos de la ordenación de la fauna, los acuerdos entre individuos o comunidades y las instituciones públicas, y la transferencia de competencias.

Si bien las leyes recientes suelen conservar muchos de los elementos básicos de las leyes anteriores, con frecuencia contienen a la vez importantes innovaciones.

En primer lugar, se tienden a colocar instrumentos arraigados de protección de la fauna en un contexto nuevo, en que se persiguen objetivos de mayor alcance y se tienen en cuenta exigencias más amplias. A fin de mantener más eficazmente la biodiversidad, las áreas protegidas se están estableciendo cada vez más como

parte de sistemas nacionales y no en retazos esparcidos. En el marco de los regímenes de caza, se presta una mayor atención a las necesidades de subsistencia de las comunidades cazadoras tradicionales.

En segundo lugar, las leyes recientes sobre fauna abordan nuevas cuestiones y prevén nuevos medios para su protección y ordenación. En particular, disponen una protección más adecuada de la biodiversidad, teniendo más claramente en cuenta la interdependencia entre las especies. Además, en lugar de centrarse únicamente en el control de la caza, abarcan los factores que representan una amenaza de mayor amplitud para la fauna, en particular exigiendo la realización de evaluaciones del impacto ambiental de las actividades que pueden perjudicar la vida silvestre. Asimismo, hacen mayor hincapié en la planificación de la ordenación, pues prevén cada vez más que los procesos de ordenación y de sus objetivos básicos estén sujetos a la ley y dependan menos de las iniciativas de las administraciones, que pueden ser variables. Por último, crean normas, instituciones y procedimientos encaminados a: hacer participar a las personas afectadas y las partes interesadas en la adopción de decisiones relacionadas con la fauna; permitir que las comunidades locales puedan aprovechar los beneficios económicos que se derivan del aprovechamiento de los recursos silvestres; y tener en cuenta las dimensiones socioculturales de la ordenación de la fauna.

Al tiempo que se destaca la legislación nacional, en el estudio se examinan brevemente también los principales rasgos de los tratados internacionales en materia de fauna, con especial atención hacia los vínculos entre los diversos instrumentos locales, nacionales e internacionales. Como botón de muestra de un sistema regional particularmente desarrollado se analizan la legislación y la jurisprudencia de la Comunidad Europea.



## **2.- INTRODUCCIÓN**

La mayor parte de los sistemas jurídicos cuentan con leyes relativas a la protección de los animales silvestres desde hace mucho tiempo. En muchos casos, el principal centro de interés era la caza, así como la necesidad conexa de proteger al menos algunas especies o etapas de la vida animal. Las disposiciones que tenían como finalidad general la protección de los animales silvestres con frecuencia se introdujeron por vez primera en la legislación sectorial sobre caza, y a menudo eran el resultado de un compromiso entre intereses contrapuestos. En ocasiones, también se designaron como áreas protegidas aquellas zonas de particular importancia para la supervivencia de los animales, mediante la creación de reservas para tal fin, este es el caso del parque Natural Nacional los Nevados.

Normalmente en una fase posterior, en muchos países se fue ampliando la gama de aspectos abarcados hasta incluir todo hábitat relevante para las especies, lo que llevó a adoptar múltiples leyes sobre diversos tipos de áreas protegidas.

Prescindiendo del hecho de que las disposiciones sobre animales silvestres y áreas protegidas hayan coexistido en un único instrumento jurídico o se hayan mantenido separadas, una característica común de la legislación de esa generación fue que rara vez abarcaba de forma global la ordenación de la fauna, que incluyera los aspectos tanto de desarrollo como de conservación.

En un estudio publicado en 1984 relacionado con la legislación sobre fauna y áreas protegidas en África, ya se había señalado una tendencia (más evidente en las últimas leyes de los años setenta que en las de los decenios anteriores) hacia una mayor atención a la ordenación y utilización de la fauna silvestre, en contraposición a un estricto interés por la caza y la protección de especies

individuales (FAO, 1984). Los sistemas jurídicos que inicialmente se basaban en dos elementos bien diferenciados - la caza y las áreas protegidas - pasaron entonces a adoptar un conjunto efectivo de leyes sobre vida silvestre en que ésta se consideró más apropiadamente como un recurso natural renovable. Así pues, el objetivo de las políticas y leyes sobre fauna pasó a ser gradualmente una adecuada ordenación de ese recurso para toda finalidad que fuera útil, pero que al mismo tiempo no ocasionara su deterioro, en consonancia con la evolución de las leyes nacionales e internacionales en materia de medio ambiente, que para finales del decenio de 1980 dieron gran cabida al principio del desarrollo sostenible.

Posteriormente surgieron cuestiones adicionales, que sirvieron de orientación para formular las leyes más recientes. Entre ellas figura una mayor atención a la función de cada especie y organismo y por ende a la protección de la biodiversidad. Asimismo, se han tenido más en cuenta los aspectos de la ordenación de la vida silvestre que guardan una mayor relación con las personas. Ello se refleja en una mayor consideración de las opiniones de la población en la adopción de decisiones y en nuevas disposiciones institucionales para tal fin, con un incremento de las iniciativas locales.

Al mismo tiempo, la comunidad internacional ha dedicado una creciente atención a la conservación del medio ambiente y la naturaleza y también ha crecido el impacto de las iniciativas internacionales. En los capítulos siguientes se examinan éstas y otras tendencias.

La legislación nacional examinada data de los años noventa y se especifica en la lista al final de este documento. Tales leyes (y en algunos casos reglamentos) se refieren directamente a los animales silvestres o más sencillamente a la caza, o más generalmente a toda la vida silvestre (en ocasiones incluidas las plantas) o la protección de la naturaleza. Además, algunas de ellas abarcan también las áreas

protegidas, conjuntamente con la vida silvestre o de forma exclusiva. En este último caso, el análisis siguió centrándose principalmente en la identificación de tendencias en la legislación sobre la fauna más que en un examen general de la legislación sobre áreas protegidas<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Oficina Jurídica y el Departamento de Montes de la FAO. Fue escrito por Maria Teresa Cirelli, quien es una consultora jurídica de la FAO y ha brindado asesoramiento a diversos países en materia de legislación sobre la vida silvestre. La supervisión técnica del estudio ha estado a cargo de Mohamed Ali Mekouar, Oficial Jurídico Superior del Servicio del Derecho para el Desarrollo de la FAO.

### **3-OBJETIVOS**

#### **3.1- Objetivo General**

Realizar un estudio de investigación monográfica, donde se analice en forma veraz y conceptual la aplicación de la legislación actual colombiana para la protección de las especies de flora y fauna en vía de extinción en la zona del Parque Nacional Natural los Nevados en Colombia.

#### **3.2- Objetivos Específicos**

- Analizar cual es la normatividad vigente en cuanto a la ordenación y protección de los animales y plantas en vía de extinción en el Parque Nacional Natural Los Nevados, mediante el uso de instrumentos de planificación, reglamentos de caza, requisitos para la concesión de licencias y control de la cría y reproducción de los animales, y plantas en la zona de influencia.
- Examinar sobre la propiedad de la fauna silvestre y derechos y obligaciones conexos, incluida la indemnización en caso de daños causados por los animales y el balance entre los derechos de los cazadores y los de los propietarios de la tierra en que viven los animales y crecen las plantas, en peligro.
- Reconocer mediante la legislación actual cuales son las áreas protegidas, comprendidas las disposiciones sobre protección de las zonas vecinas y la relación entre la protección de la vida silvestre y otras formas de aprovechamiento de la tierra.

- Hacer un estudio sobre la participación, facilitada por las instituciones, en la toma de decisiones relacionadas con la fauna silvestre y en los beneficios económicos resultantes, incluidos los mecanismos de consulta, los órganos representativos de la ordenación de la fauna, los acuerdos entre individuos o comunidades y las instituciones públicas, y la transferencia de competencias, en la zona materia del estudio.
- Discernir en que si bien las leyes recientes suelen conservar muchos de los elementos básicos de las leyes anteriores, con frecuencia contienen a la vez importantes innovaciones.
- Recalcar sobre recomendaciones y conclusiones personales sobre el trabajo investigativo.

#### **4.- JUSTIFICACIÓN**

La mayor parte de los sistemas jurídicos cuentan con leyes relativas a la protección de los animales silvestres desde hace mucho tiempo. En muchos casos, el principal centro de interés era la caza, así como la necesidad conexa de proteger al menos algunas especies o etapas de la vida animal. Las disposiciones que tenían como finalidad general la protección de los animales silvestres con frecuencia se introdujeron por vez primera en la legislación sectorial sobre caza, y a menudo eran el resultado de un compromiso entre intereses contrapuestos. En ocasiones, también se designaron como áreas protegidas aquellas zonas de particular importancia para la supervivencia de los animales, mediante la creación de reservas para tal fin<sup>2</sup>.

Normalmente en una fase posterior, en muchos países se fue ampliando la gama de aspectos abarcados hasta incluir todo hábitat relevante para las especies, lo que llevó a adoptar múltiples leyes sobre diversos tipos de áreas protegidas.

Prescindiendo del hecho de que las disposiciones sobre animales silvestres y áreas protegidas hayan coexistido en un único instrumento jurídico o se hayan mantenido separadas, una característica común de la legislación de esa generación fue que rara vez abarcaba de forma global la ordenación de la fauna, que incluyera los aspectos tanto de desarrollo como de conservación.

En un estudio publicado en 1984 relacionado con la legislación sobre fauna y áreas protegidas en África, ya se había señalado una tendencia (más evidente en

---

<sup>2</sup> Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia.

las últimas leyes de los años setenta que en las de los decenios anteriores) hacia una mayor atención a la ordenación y utilización de la fauna silvestre, en contraposición a un estricto interés por la caza y la protección de especies individuales (FAO, 1984). Los sistemas jurídicos que inicialmente se basaban en dos elementos bien diferenciados - la caza y las áreas protegidas - pasaron entonces a adoptar un conjunto efectivo de leyes sobre vida silvestre en que ésta se consideró más apropiadamente como un recurso natural renovable. Así pues, el objetivo de las políticas y leyes sobre fauna pasó a ser gradualmente una adecuada ordenación de ese recurso para toda finalidad que fuera útil, pero que al mismo tiempo no ocasionara su deterioro, en consonancia con la evolución de las leyes nacionales e internacionales en materia de medio ambiente, que para finales del decenio de 1980 dieron gran cabida al principio del desarrollo sostenible<sup>3</sup>.

Posteriormente surgieron cuestiones adicionales, que sirvieron de orientación para formular las leyes más recientes. Entre ellas figura una mayor atención a la función de cada especie y organismo y por ende a la protección de la biodiversidad. Asimismo, se han tenido más en cuenta los aspectos de la ordenación de la vida silvestre que guardan una mayor relación con las personas. Ello se refleja en una mayor consideración de las opiniones de la población en la adopción de decisiones y en nuevas disposiciones institucionales para tal fin, con un incremento de las iniciativas locales. Al mismo tiempo, la comunidad internacional ha dedicado una creciente atención a la conservación del medio ambiente y la naturaleza y también ha crecido el impacto de las iniciativas internacionales. En los capítulos siguientes se examinan éstas y otras tendencias.

---

<sup>3</sup> Decisión del 7 de marzo de 1996, Asociación Italiana para el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) et al. contra la Región Véneta, caso C-118/94.  
[

La legislación nacional examinada data de los años noventa y se especifica en la lista al final de este documento. Tales leyes (y en algunos casos reglamentos) se refieren directamente a los animales silvestres o más sencillamente a la caza, o más generalmente a toda la vida silvestre (en ocasiones incluidas las plantas) o la protección de la naturaleza. Además, algunas de ellas abarcan también las áreas protegidas, conjuntamente con la vida silvestre o de forma exclusiva. En este último caso, el análisis siguió centrándose principalmente en la identificación de tendencias en la legislación sobre la fauna más que en un examen general de la legislación sobre áreas protegidas.

#### **4.1- Hipótesis**

En Colombia existe una verdadera normatividad aplicable a la protección de especies en vía de extinción, para el caso en particular del Parque Natural Nacional Los Nevados, o solo es letra muerta, mientras las especies se ven amenazadas por el tráfico, desmedida explotación y caza, que hacen que las especies nativas desaparezcan de manera incontrolada y sin ninguna penalización para los culpables de tal atropello contra el medio ambiente y la riqueza natural de la región.

#### **4.2- - Principales Efectos Socio jurídicos.**

Dentro de los principales efectos jurídicos y sociales de la investigación monográfica cabe resaltar que en los últimos años, países de todo el mundo han realizado una exhaustiva revisión de su vigente legislación en materia de fauna y flora o han adoptado nuevos marcos jurídicos para la ordenación y protección de la vida silvestre. El propósito del presente estudio es evaluar la situación actual de las leyes nacionales sobre la fauna en el mundo, con particular atención a las



nuevas leyes y a las innovaciones jurídicas que se han adoptado en el último decenio, a nivel regional en especial sobre la zona de influencia del trabajo monográfico

La legislación examinada abarca leyes que se ocupan concretamente de la fauna y la caza, así como disposiciones de utilidad incluidas en leyes concernientes a otras materias, como las áreas protegidas, los bosques, la biodiversidad y el medio ambiente. Cuando procede, también se hace referencia a instrumentos legales locales en los casos en que las competencias en materia de ordenación de la fauna se hayan transferido en parte o totalmente a los gobiernos locales.

Habida cuenta de la amplitud de la materia en examen, el presente estudio no pretende representar un examen exhaustivo de todas las leyes pertinentes que están vigentes en los países a los cuales se tomaran como antecedentes internacionales. Más bien determina las principales tendencias discernibles en la legislación relativa a la fauna silvestre - así como las excepciones más destacadas mediante el examen de las leyes de una muestra representativa de países.

Con este proceso, se evalúa la forma en que la legislación vigente aborda los temas centrales relacionadas con la fauna y sus hábitats, a saber, con lo cual se centran los objetivos de esta monografía.

En los decenios pasados se ha experimentado un incremento masivo de normas medioambientales, adoptadas en foros internacionales, como los acuerdos mundiales o regionales y las leyes promulgadas por la Comunidad Europea (CE), así como el consiguiente mayor impacto de tales fuentes en los sistemas jurídicos nacionales.

Al mismo tiempo, se ha registrado una creciente tendencia hacia la transferencia de responsabilidades en el sector medioambiental desde los gobiernos centrales hacia las autoridades locales. En los Estados que poseen una estructura descentralizada, federal o parecida, con frecuencia la fauna silvestre es una de las materias sobre la que las autoridades locales pueden en cierta medida promulgar leyes, en forma independiente o en el marco de leyes establecidas a nivel central.

Estos procesos paralelos son enfoques productivos en lo que concierne tanto a la protección como la ordenación de la fauna. Por lo que se refiere a las iniciativas internacionales, la armonización de la legislación medioambiental entre países diferentes resulta de utilidad, pues puede llevar a los que están rezagados en cuanto a la adopción de normas medioambientales rigurosas hasta los niveles de los países más activos, al tiempo que por lo general no impide a estos últimos adoptar medidas de protección más estrictas. La adopción de normas a nivel internacional permite asimismo proteger y manejar especies cuyo alcance rebasa las fronteras nacionales. Puede además contribuir a una competencia justa entre las empresas, pues si están vigentes normas medioambientales armonizadas, los productores afectados se ven a su vez sujetos a las mismas restricciones o a otras muy similares, lo que redundará también en beneficio de los consumidores.

Por lo que atañe a la creciente transferencia de responsabilidades al nivel local, este proceso puede hacer que se tengan más en cuenta todos los intereses del caso y que se celebren consultas adecuadas con sus representantes, especialmente cuando las autoridades se eligen de forma democrática. Además, puede facilitar la determinación de particulares exigencias locales con respecto a las especies autóctonas o determinados lugares. Los acuerdos internacionales en materia medioambiental más recientes, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, hacen hincapié en la adopción de medidas y la planificación que abarquen zonas específicas, lo que por lo general se logra mejor a nivel local. La

incorporación de cuestiones medioambientales en la planificación local puede contribuir considerablemente a conservar los hábitats situados fuera de las áreas protegidas. Los conflictos que con frecuencia surgen entre autoridades centrales diferentes encargadas de sectores interrelacionados (fauna y caza, agricultura, sector forestal, medio ambiente) pueden mitigarse si se confieren a las autoridades locales las responsabilidades generales del desarrollo de sus respectivas áreas territoriales, pues por lo general en este nivel los diferentes sectores administrativos se hallan más integrados. Las autoridades locales, que son los representantes más cercanos a las comunidades, suelen estar en mejor posición para garantizar sus intereses en un proceso de planificación integrada. Por consiguiente, los procesos legislativos internacionales y locales, así como su aplicación, pueden contribuir apreciablemente a la conservación de la fauna silvestre. Sin embargo, la integración entre todos estos procesos puede resultar muy compleja. La legislación adoptada a nivel internacional normalmente debe aplicarse mediante la adopción de normas nacionales específicas. Puede darse el caso de que el poder para emanar leyes sobre una materia pertinente en un país se haya delegado a uno o más niveles locales. Mientras el Estado siga siendo responsable de las obligaciones contraídas a nivel internacional, su cumplimiento armonizado, incluso dentro de un único país, puede verse dificultado por la inercia de algunas autoridades locales, o por posibles diferentes formas de aplicación.

En múltiples sistemas jurídicos se abordan actualmente los temas de la protección y ordenación de la biodiversidad, mediante la incorporación de los objetivos de interés en la legislación relativa al medio ambiente o la vida silvestre, o mediante la adopción de leyes específicas distintas.

### **4.3- Marco Conceptual**

En la introducción se exponen brevemente las orientaciones que ya se habían identificado en el contexto de un análisis de las leyes de los países africanos. Si se les compara con las de la generación anterior, por lo general las últimas leyes del decenio de 1970 abarcaban de manera más amplia la ordenación de la fauna silvestre, incluyendo los aspectos de desarrollo y de conservación.

En el capítulo II, que vierte sobre la legislación internacional, nacional y local sobre ordenación de la fauna, se mencionan las relaciones entre estos diversos niveles de poderes legislativos, así como los beneficios y la complejidad que se derivan del incremento de iniciativas internacionales y locales. Si bien la oportuna adopción de leyes en niveles territoriales diferentes puede arrojar múltiples beneficios, también pueden surgir algunas dificultades en la coordinación y por ende en el logro de una aplicación armonizada de la ley, por ejemplo en el caso de acuerdos internacionales o de disposiciones nacionales que han de aplicarse a nivel regional.

En el capítulo III se examina cómo las leyes abordan algunas cuestiones de importancia relativas a la ordenación de la fauna. Las secciones de este capítulo vierten sobre las normas de protección, la planificación de la ordenación y otros aspectos relacionados con ésta, como la caza, la utilización de licencias o la cría y reproducción de los animales silvestres.

En la sección sobre planificación de la ordenación se describen algunas disposiciones en que se establecen los procesos de ordenación de la fauna, que pueden suponer actividades como el acopio de los datos pertinentes y la adopción de diferentes tipos de planes de gestión. Este análisis parece indicar que si bien casi todos los países han previsto una base jurídica de algún tipo para planificar la

ordenación, el enfoque de este tema sigue siendo fragmentario, es decir, rara vez las leyes establecen un marco racional completo.

Por lo general las disposiciones de las leyes nacionales sobre licencias y permisos están encaminadas a contribuir a una ordenación racional de la fauna silvestre. No obstante, en la sección dedicada a este tema se señala que este efecto es limitado, pues aunque la mayoría de los países prevé numerosos requisitos para la concesión de licencias, no vinculan su expedición a las reales exigencias de la ordenación, y las decisiones conexas se dejan en gran medida a la discreción de las administraciones. Algunas leyes prevén diferentes tipos de licencias, basadas en los diversos grados de protección de los animales de que se trate, el tamaño de los animales (por ejemplo, animales de caza pequeños o de grandes dimensiones), el lugar de residencia (por ejemplo, para visitantes y extranjeros) o los objetivos de la caza o captura de animales (por ejemplo, finalidades deportivas, de subsistencia, científicas).

El análisis de las disposiciones relacionadas con la cría y reproducción de animales de caza indica que fundamentalmente establecen sistemas de control con miras a proteger el medio ambiente y la biodiversidad y prevenir efectos negativos.

En el capítulo IV, que trata de la propiedad de la fauna, se presentan algunos enfoques diferentes de la propiedad de los recursos de fauna y los derechos y obligaciones conexas, como el derecho de caza y el derecho de obtener beneficios financieros de la fauna, así como la obligación de llevar a cabo la ordenación de los animales y pagar indemnizaciones por el daño que puedan provocar. Existen dos tendencias principales en la propiedad de la fauna silvestre: la propiedad estatal y la propiedad por terratenientes privados o comunales.

En el capítulo V, sobre utilización de la tierra y áreas protegidas, se exponen las disposiciones concernientes a los tipos de áreas protegidas que están dedicadas específicamente a la protección y ordenación de la fauna, con inclusión de la caza. La sección subsiguiente hace mención de las escasas disposiciones de las leyes nacionales sobre las medidas de protección de la fauna aplicables fuera de las áreas protegidas. En la sección final se examina la relación entre la ordenación de la fauna, que conlleva la utilización de la tierra en diversas formas, y otros usos de la tierra en las áreas protegidas y zonas vecinas, y en general las políticas y la planificación de la utilización de las tierras. Este es otro tema que rara vez se aborda en la legislación.

En el capítulo VI se examinan las disposiciones concernientes a la participación del público en la ordenación de la fauna. Las ventajas que presenta esta participación en los beneficios derivados de la ordenación de la vida silvestre, así como en la adopción de decisiones en la materia son múltiples; entre ellas cabe mencionar el amplio apoyo a las medidas que se adoptan y la consiguiente mejora de su aplicación y cumplimiento.

#### **4.4- Marco Demografico.**

Sin referencia, porque se trata de una investigación netamente teórica.

#### **4.5-.Marco Geográfico.**

El área materia del estudio se encuentra comprendida en le sector denominado Parque Natural Nacional Los Nevados

## **5.- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL.**

El Ministerio del Medio Ambiente es la máxima autoridad ambiental de Colombia y fue creado en el año de 1993, mediante la ley 99. Sus objetivos son, entre otros, impulsar las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y del medio ambiente de la nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible.

Además, reserva, delimita, sustrae y administra las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Natural. Asimismo, coordina, promueve, y orienta acciones de investigación sobre el medio ambiente y los recursos naturales renovables, como también fija pautas generales de conservación, preservación, uso, ordenamiento y dirección de las cuencas hidrográficas y demás áreas de manejo ambiental como las zonas marinas y costeras.

### **5.1.- Dirección de Ecosistemas**

#### **VISION**

Constituirse en la Dirección del MAVDT responsable de generar los fundamentos técnicos para liderar y orientar la definición de la Política ambiental, gestión ambiental y toma de decisiones en relación con la diversidad biológica a partir de un enfoque ecosistémico que contribuya al desarrollo sostenible del país.

## **MISION**

Contribuir a la preservación, conservación, restauración, manejo, uso y aprovechamiento de la diversidad biológica a nivel de ecosistemas, especies, genomas y otros niveles de organización como base estratégica actual y potencial para el desarrollo sostenible del país, a través de la expedición de Políticas, regulaciones y gestión ambiental

Los ecosistemas y la biodiversidad por ser recursos estratégicos para el desarrollo social, económico y cultural, deben ser conocidos conservados y usados sosteniblemente tal como lo define la Convención de Diversidad Biológica, así como también garantizar el abastecimiento de servicios ambientales.

La gestión sobre el patrimonio natural es una responsabilidad compartida entre los sectores público, privado y la sociedad civil. Por lo tanto debe ser descentralizada y participativa.

Los ecosistemas son un espacio vital de las comunidades campesinas, afro colombianas e indígenas, y donde el respeto por su conocimiento tradicional ancestrales fundamental.

25 millones de hectáreas son territorios comunitarios y la biodiversidad provee seguridad alimentaría directa a las poblaciones locales. Por su parte suministra materia prima para procesos industriales y abastece de recursos hídricos para el consumo humano y actividades del agro y la industria.



## **OBJETIVOS MISIONALES**

1. Formular políticas ambientales en materia de diversidad biológica a nivel ecosistemas, especies y genomas ,y coordinar la implementación y seguimiento de las aprobadas (Humedales, Diversidad Biológica, Zonas Marinas y Costeras, Bosques, Fauna); así como de las Estrategias (Prevención y control al tráfico ilegal de especies silvestres), Planes (Plan Nacional de Desarrollo Forestal, Plan de Acción Nacional de lucha contra la Desertificación, Plan Nacional de Prevención, Control de Incendios Forestales y Restauración de Áreas Afectadas) y Programas (Páramos, Manglares, Especies Amenazadas).
2. Definir los criterios técnicos para la planificación y ordenación ambiental del territorio con miras a integrar el uso y manejo sostenible de la diversidad biológica al desarrollo económico y social del país.
3. Aportar los criterios técnicos necesarios para prevenir, mitigar, corregir y compensar los efectos adversos sobre la diversidad biológica generados por las políticas y programas sectoriales.
4. Proponer conjuntamente con la Unidad de Parques las Políticas y Estrategias para la creación y consolidación del Sistema de Áreas Protegidas.
5. Regular las condiciones generales para la preservación, conservación, restauración, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica.
6. Establecer estrategias para el desarrollo de alternativas productivas con base en el aprovechamiento sostenible de los bienes y servicios ambientales de la diversidad biológica.

7. Apoyar la definición de instrumentos para la gestión en materia de recursos genéticos, bioseguridad y biotecnología.

8. Establecer las prioridades de investigación que deben adelantar los institutos de investigación en diversidad biológica a nivel de ecosistemas, especies, genomas y otros niveles, así como realizar el seguimiento a su implementación.

9. Cumplir con los compromisos emanados de los Convenios, Tratados, Protocolos y demás instrumentos internacionales adoptados mediante Ley de la República en materia de diversidad biológica.

En ese contexto los temas de ecosistemas y biodiversidad dentro del Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario”, son:

1. Impulsar el crecimiento económico sostenible y la generación de empleo.

Conservación y uso sostenible de bienes y servicios ambientales:

- Manejo de poblaciones de especies silvestres amenazadas y de uso potencial.

- Fomento de desarrollos biotecnológicos a partir de los componentes de la biodiversidad y gestión en materia de bioseguridad.

- Conservación, manejo, uso y restauración de ecosistemas de bosques y otros ecosistemas.

- Redelimitación y ordenación de las reservas forestales.

- Puesta en marcha de planes de ordenación y manejo de bosques naturales

- Desarrollo de las políticas ambientales de humedales, de páramos y de mares y costas.

2.Impulsar el crecimiento económico sostenible y la generación de empleo.

Manejo Integral del Agua:

Establecimiento y manejo de 120.000 has de plantaciones protectoras en áreas abastecedoras de acueductos municipales.

Ordenamiento y manejo integral de micro cuencas en cerca de 500.000 hectáreas.

## **Funciones**

(Decreto 216 de 2003)

1. Formular e implementar las políticas, planes, programas, proyectos y regulación con respecto a la conservación, manejo, restauración y uso sostenible de los ecosistemas forestales, terrestres, acuáticos continentales, costeros y marinos y de la biodiversidad.

2. Formular el Plan Nacional de Desarrollo Forestal y coordinar su implementación.

3. Proponer, conjuntamente con la Unidad del Sistema de Parques Nacionales Naturales y las autoridades ambientales, las políticas y estrategias para la creación, administración y manejo de las áreas de manejo especial, áreas de reserva forestal y demás áreas protegidas y la delimitación de las zonas amortiguadoras de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales

4. Diseñar y proponer las reglas y criterios técnicos y metodológicos para la zonificación y ordenación ambiental de los ecosistemas de valor estratégico como apoyo a los procesos de ordenamiento territorial.
5. Proponer los criterios técnicos para el establecimiento de las tasas de uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y la definición de metodologías de valoración de los costos ambientales por el deterioro y/o conservación de los ecosistemas y sus recursos asociados.
6. Coordinar con las entidades del Sistema Nacional Ambiental -SINA la implementación de sistemas de inventarios, la definición de criterios técnicos y metodologías para establecer las especies y cupos globales para el aprovechamiento de bosques naturales.
7. Proponer los criterios técnicos para el ordenamiento, manejo y restauración de cuencas hidrográficas.
8. Regular las condiciones generales del uso sostenible, aprovechamiento, manejo, conservación y restauración de la diversidad biológica tendientes a prevenir, mitigar y controlar su pérdida y/o deterioro.
9. Vigilar que el estudio, exploración e investigación de nacionales o extranjeros en relación a los recursos naturales, respete la soberanía nacional y los derechos de la Nación sobre los recursos genéticos.
10. Aportar los criterios técnicos que deberán considerarse dentro del proceso de licenciamiento ambiental y demás instrumentos relacionados.

11. Formular y conceptuar para el desarrollo de un marco normativo en materia de recursos genéticos.

12. Proponer y coordinar las prioridades de investigación que en el área de su competencia deben adelantar los institutos de investigación y realizar su seguimiento.

13. Fijar de común acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural especies y los volúmenes de pesca susceptibles de ser aprovechados en las aguas continentales y en los mares adyacentes con base en los cuales la autoridad competente, expedirá los correspondientes permisos de aprovechamiento.

14. Aportar los criterios técnicos requeridos para la adopción de las medidas necesarias para asegurar la protección de especies de flora y fauna silvestres amenazadas; e implementar la Convención sobre el **Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora – CITES**.

15. Las demás que le sean asignadas y que por su naturaleza le correspondan.

## **5.2.- Sistema Nacional Ambiental (SINA)**

La ley 99 de 1993 creó el Sistema Nacional Ambiental (SINA), que se define como el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales contenidos en la Constitución Política de Colombia de 1991 y la ley 99 de 1993. El SINA está integrado por el Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales, las Entidades Territoriales y los Institutos de Investigación adscritos y vinculados al Ministerio. El Consejo Nacional

Ambiental tiene el propósito de asegurar la coordinación intersectorial en el ámbito público de las políticas, planes y programas en materia ambiental y de recursos naturales renovables.

La ley 99 de 1993 también crea los Institutos de Investigación adscritos y vinculados al Ministerio del Medio Ambiente, como órganos de carácter técnico asesor para el Sistema Nacional Ambiental (SINA). Los otros cuatro institutos creados son:

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), cuyo objetivo es obtener, analizar, estudiar, procesar y divulgar la información relativa al medio ambiente físico.

El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andreis (INVEMAR) realiza investigación sobre los recursos naturales renovables y el medio ambiente en ecosistemas marinos y costeros.

El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI realiza investigaciones biológicas y sociales de la región amazónica.

El Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico realizará investigaciones sobre el medio ambiente del Litoral Pacífico

### **5.3.- Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora – CITES.**

CITES es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres; también se conoce como el Convenio de Washington D.C.. Se firmó el 3 de marzo de 1973 y entró en vigor el 1 de julio

de 1975 (Ver texto de la Convención). La Convención surgió como consecuencia de la preocupación por los efectos perjudiciales que los altos niveles de comercio internacional pudieran tener sobre la fauna y flora silvestres, teniendo como objetivo principal, la regulación del comercio de especies de fauna y flora silvestres a través del establecimiento de mecanismos de cooperación internacional entre gobiernos. La Convención CITES es una herramienta para regular el comercio internacional de especies de fauna y flora silvestres de forma efectiva y constante, asegurando su conservación y uso sostenible.

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres tiene como fin último la protección de especies de fauna y flora que por su comercio pueden estar amenazadas.

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres tiene como fin último la protección de especies de fauna y flora que por su comercio pueden estar amenazadas. Dicha protección se hace a través de mecanismos de restricción y de vigilancia al mercado internacional de las mismas. El tipo de control sobre las especies de fauna y flora silvestres depende del grado de amenaza de las mismas.

Colombia adhirió a la CITES mediante la Ley 17 de 1981 y entró en vigor para Colombia el 29 de noviembre del mismo año.

### **Cómo funciona**

La Convención establece, a nivel internacional, el marco jurídico y los mecanismos procedimentales comunes para prevenir el intercambio comercial internacional de especies amenazadas y para una regulación efectiva del comercio internacional de otras especies.

Actualmente 167 países (La Conferencia de las Partes) usan este marco y mecanismo procedimental para regular y supervisar el comercio internacional de las especies de fauna y flora silvestre.

La Conferencia de las Partes adopta Resoluciones para orientar la interpretación y aplicación de la Convención y Decisiones.



## **6- DERECHO DE LA FAUNA: DIMENSIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES**

### **6.1.-Antecedentes y Vínculos entre leyes locales, nacionales e internacionales**

En los decenios pasados se ha experimentado un incremento masivo de normas medioambientales, adoptadas en foros internacionales, como los acuerdos mundiales o regionales y las leyes promulgadas por la Comunidad Europea (CE), así como el consiguiente mayor impacto de tales fuentes en los sistemas jurídicos nacionales.

Al mismo tiempo, se ha registrado una creciente tendencia hacia la transferencia de responsabilidades en el sector medioambiental desde los gobiernos centrales hacia las autoridades locales. En los Estados que poseen una estructura descentralizada, federal o parecida, con frecuencia la fauna silvestre es una de las materias sobre la que las autoridades locales pueden en cierta medida promulgar leyes, en forma independiente o en el marco de leyes establecidas a nivel central.

Estos procesos paralelos son enfoques productivos en lo que concierne tanto a la protección como la ordenación de la fauna. Por lo que se refiere a las iniciativas internacionales, la armonización de la legislación medioambiental entre países diferentes resulta de utilidad, pues puede llevar a los que están rezagados en cuanto a la adopción de normas medioambientales rigurosas hasta los niveles de los países más activos, al tiempo que por lo general no impide a estos últimos adoptar medidas de protección más estrictas. La adopción de normas a nivel internacional permite asimismo proteger y manejar especies cuyo alcance rebasa las fronteras nacionales. Puede además contribuir a una competencia justa entre

las empresas, pues si están vigentes normas medioambientales armonizadas, los productores afectados se ven a su vez sujetos a las mismas restricciones o a otras muy similares, lo que redundará también en beneficio de los consumidores<sup>4</sup>.

Por lo que atañe a la creciente transferencia de responsabilidades al nivel local, este proceso puede hacer que se tengan más en cuenta todos los intereses del caso y que se celebren consultas adecuadas con sus representantes, especialmente cuando las autoridades se eligen de forma democrática. Además, puede facilitar la determinación de particulares exigencias locales con respecto a las especies autóctonas o determinados lugares. Los acuerdos internacionales en materia medioambiental más recientes, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, hacen hincapié en la adopción de medidas y la planificación que abarquen zonas específicas, lo que por lo general se logra mejor a nivel local. La incorporación de cuestiones medioambientales en la planificación local puede contribuir considerablemente a conservar los hábitats situados fuera de las áreas protegidas. Los conflictos que con frecuencia surgen entre autoridades centrales diferentes encargadas de sectores interrelacionados (fauna y caza, agricultura, sector forestal, medio ambiente) pueden mitigarse si se confieren a las autoridades locales las responsabilidades generales del desarrollo de sus respectivas áreas territoriales, pues por lo general en este nivel los diferentes sectores administrativos se hallan más integrados. Las autoridades locales, que son los representantes más cercanos a las comunidades, suelen estar en mejor posición para garantizar sus intereses en un proceso de planificación integrada.

---

<sup>4</sup> Decreto del Presidente del Consejo de Ministros del 27 de septiembre de 1997, subsiguiente a una decisión del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (WWF/Región Véneta), que se cita infra (2.3.4.), en que se consideraba que la práctica seguida en Italia en materia de excepciones no cumplía las disposiciones de la Directiva de Aves.

Por consiguiente, los procesos legislativos internacionales y locales, así como su aplicación, pueden contribuir apreciablemente a la conservación de la fauna silvestre. Sin embargo, la integración entre todos estos procesos puede resultar muy compleja. La legislación adoptada a nivel internacional normalmente debe aplicarse mediante la adopción de normas nacionales específicas. Puede darse el caso de que el poder para emanar leyes sobre una materia pertinente en un país se haya delegado a uno o más niveles locales. Mientras el Estado siga siendo responsable de las obligaciones contraídas a nivel internacional, su cumplimiento armonizado, incluso dentro de un único país, puede verse dificultado por la inercia de algunas autoridades locales, o por posibles diferentes formas de aplicación.

El proceso de aplicación de la legislación de la CE, por ejemplo, a menudo ha resultado menos eficiente en el caso de la «transposición» obligatoria de reglamentos relativos a temas reservados al poder legislativo de las autoridades locales de los Estados miembros. Este problema trasciende la cuestión de la legislación sobre ordenación de la fauna, y en los Estados miembros de la Unión Europea se están experimentando diversos enfoques a fin de facilitar la observancia de las obligaciones internacionales y al mismo tiempo respetar la función y las actividades de las autoridades locales.

El caso de Italia proporciona una serie de ejemplos concretos. En ese país, se adoptaron algunas leyes en el decenio pasado con la finalidad específica de mejorar la eficacia del proceso de integración de la legislación de la CE en el sistema jurídico nacional. Algunas de esas leyes son aplicables a cualquier tema, mientras que otras atañen específicamente a la legislación sobre ordenación del medio ambiente y la vida silvestre y son consecuencia de múltiples litigios iniciados por las regiones o las asociaciones ecológicas. Por ejemplo, en un decreto de 1997[1], se reglamentan de forma específica los poderes respectivos de las autoridades centrales y las regiones en relación con la suspensión de la

aplicación de la Directiva de la CE sobre conservación de las aves silvestres. Si bien en la Directiva se establece una lista de especies protegidas, se permite que los Estados miembros den su consentimiento a determinadas excepciones en circunstancias específicas (art. 9(1)(c)). Las regiones italianas solían disponer a su arbitrio las excepciones de la aplicación de las normas de la CE. El decreto reserva al Estado el derecho de establecer un régimen uniforme en materia de suspensiones. Las administraciones regionales pueden conceder exenciones únicamente con el consenso del Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Políticas Agrícolas y Forestales, con sujeción a condiciones específicas cuyo control incumbe al Instituto Nacional para la Fauna Silvestre.

En el Decreto legislativo 112 del 31 de marzo de 1998 se especifican, entre otras, las funciones relacionadas con la protección de la naturaleza que se han declarado «de importancia nacional». Entre ellas figuran la aplicación de la legislación internacional y de la CE sobre protección del medio ambiente; la conservación y el mejoramiento de las áreas protegidas que se consideran de importancia nacional o internacional, y protección de la biodiversidad, la fauna y la flora que se hallan específicamente amparadas por leyes internacionales o de la CE; la modificación de las listas de especies que se pueden cazar de conformidad con las leyes internacionales, de especies en peligro de extinción y de mamíferos y reptiles peligrosos; y la autorización para la importación o exportación de especies autóctonas (art. 69.1(a),(b),(i) y (l)-(n)).

Ha habido asimismo controversias entre las autoridades centrales y regionales respecto de la aplicación de las leyes nacionales que permiten a las regiones modificar las temporadas de caza establecidas en la legislación nacional (ley de protección de los animales silvestres de sangre caliente y la caza, art. 19). En la práctica, esta posibilidad se ha utilizado principalmente para permitir períodos de caza más prolongados en ciertas regiones, sin tener en debida cuenta el parecer

del Instituto Nacional para la Fauna Silvestre, que por ley debe publicarse, lo que es objeto de duras críticas por parte de las organizaciones ecológicas.

Unas normas internacionales, nacionales y locales adecuadas son medios esenciales para una correcta ordenación de la fauna silvestre. Si las cuestiones pertinentes se abordan en el nivel territorial más apropiado también se contribuye a que esas normas sean más eficaces. Por ejemplo, las especies cuya área de distribución rebasa las fronteras administrativas con toda probabilidad se tratarán mejor a nivel nacional o internacional, puesto que en este caso puede adoptarse un único enfoque general para su ordenación. Por el contrario, hay zonas o especies cuyas características hacen necesario un reglamento local más detallado, y por ende es mejor abordarlas a nivel local, si bien en el contexto de los principios internacionales y nacionales. Además es fundamental que se tomen medidas claras en lo que respecta a la división de poderes legislativos y administrativos en los niveles internacional, nacional y local, independientemente de que se incluyan o no se incluyan en disposiciones legales específicas.

## **6.2.-Panorama de los principales acuerdos internacionales**

Muchos de los acuerdos internacionales adoptados a nivel mundial o regional conciernen a la fauna silvestre o de una u otra manera pueden producir efectos en ella. Si bien el presente estudio se centra en las leyes nacionales, en esta sección se resume el contenido de los principales acuerdos mundiales en la materia, ya que han contribuido considerablemente al desarrollo de las leyes nacionales. Esto no ha ocurrido sólo en los numerosos Estados que los han suscrito sino también en otros países cuya legislación ha recibido su influencia, aunque no se haya emprendido o ultimado un proceso de aceptación oficial. Por lo que se refiere a las iniciativas regionales, el caso peculiar de la legislación de la CE, que ha tenido un

impacto importante en las leyes de sus Estados miembros, se presenta de forma separada en la sección subsiguiente.

Entre los acuerdos de mayor relevancia cabe citar la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), que se adoptó en Washington en 1973. La Convención protege las especies amenazadas al restringir y reglamentar su comercio internacional mediante sistemas de concesión de permisos para la exportación. En el caso de especies en peligro de extinción que se ven o pueden verse afectadas por el comercio (enumeradas en el Apéndice I de la Convención), los permisos de exportación pueden expedirse únicamente en circunstancias excepcionales y con sujeción a condiciones muy severas; también para importar tales especies hace falta un permiso, y no se autoriza el comercio con fines primordialmente comerciales. En el caso de especies que pueden verse amenazadas a menos que no se controle estrictamente su comercio (cuya lista figura en el Apéndice II), pueden concederse permisos de exportación (incluidas las actividades comerciales) sólo si la exportación no perjudica la supervivencia de la especie en cuestión y se cumplen las demás condiciones previstas. Para las especies ya sujetas a normas nacionales pero que necesitan de la cooperación internacional para el control de su comercio (incluidas en el Apéndice III), pueden otorgarse permisos de exportación para los especímenes que no se hayan explotado ilegalmente. La Conferencia de las Partes se encarga de las adiciones o cancelaciones de especies de los Apéndices I y II, de conformidad con criterios establecidos. En 1994, la Conferencia adoptó unos nuevos criterios que abrogaban otros que habían estado en vigor por mucho tiempo. Esos nuevos criterios abarcan

principios generales como el principio cautelar y condiciones muy detalladas de índole biológica o de otro tenor<sup>5</sup>.

La Convención prevé que los Estados adopten leyes que sancionen el comercio y la posesión de las especies abarcadas, y que contemplen la confiscación de las especies exportadas ilegalmente o su restitución al Estado. En el último decenio, la Conferencia de las Partes adoptó diversas resoluciones sobre medidas de aplicación y cumplimiento, como la Resolución 9.9 (1994), en que se recomienda la confiscación de los especímenes exportados de forma ilegal; la Resolución 9.10 (Rev.) (1994), sobre la enajenación de los especímenes confiscados o de partes o derivados de ellas; y la Resolución 11.3 (2000), en la que se recomienda una mayor coordinación entre las autoridades competentes y se esbozan medidas para promover su aplicación, como la creación de incentivos apropiados para las comunidades locales y rurales. La Conferencia ha adoptado asimismo

---

<sup>5</sup> Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia.

Entre otras leyes relacionadas con la fauna silvestre figuran los siguientes instrumentos:

- Reglamento (CE) No. 338/97 del Consejo del 9 de diciembre de 1996 relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio, concerniente a la aplicación de la CITES dentro de la Comunidad, en su forma enmendada;
- Decisión de la Comisión 97/266/CE del 18 de diciembre de 1996 relativa a un formulario de información sobre un espacio propuesto para su inclusión en la red Natura 2000;
- Directiva 1999/22/CE del 29 de marzo de 1999 del Consejo relativa al mantenimiento de animales salvajes en parques zoológicos;
- Reglamento (CE) No. 1808/2001 de la Comisión, del 30 de agosto de 2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) No. 338/97 relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio;
- Reglamento (CE) No. 2087/2001 de la Comisión, del 24 de octubre de 2001, por el que se suspende la introducción en la Comunidad de especímenes de determinadas especies de fauna y flora silvestres.

Decisión de la Comisión 97/266/CE del 18 de diciembre de 1996 relativa a un formulario de información sobre un espacio propuesto para su inclusión en la red Natura 2000.

resoluciones sobre el comercio de determinadas especies y sobre la cría y reproducción de especies protegidas<sup>6</sup>.

En 1997 la Conferencia de las Partes adoptó una «Estrategia para el desarrollo futuro de la Convención», en la que se establecieron los objetivos prioritarios para el trienio de 1998-2000. Asimismo, en 1999, adoptó el Plan Estratégico para 2000-2005, entre cuyos objetivos figura dar prioridad a las medidas de conservación de las especies migratorias, inter alia, teniendo en cuenta las especies migratorias en las políticas gubernamentales, reduciendo los obstáculos para la migración y determinando las especies contenidas en el Apéndice II a las que debe darse prioridad para concluir acuerdos en el marco de la Convención; promover el acceso a la Convención de países específicos; y facilitar y mejorar la aplicación de la Convención, mediante la movilización de recursos financieros, la racionalización de las disposiciones institucionales y el fortalecimiento de los vínculos con otras disposiciones internacionales relacionadas con la biodiversidad.

---

<sup>6</sup> Otro acuerdo internacional importante es la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, adoptada en Bonn en 1979, que prevé la cooperación entre los Estados que albergan especies migratorias que atraviesan periódicamente las fronteras internacionales. En cuanto a las especies que se consideran en peligro de extinción (que se indican en el Apéndice I), los Estados deben conservar y restaurar sus hábitats; prevenir, eliminar o reducir al mínimo los obstáculos que impiden su migración; prevenir, reducir y controlar los factores que pueden ponerlos en peligro; y prohibir su captura. Respecto de otras especies que poseen un estado desfavorable de conservación (y que se enumeran en el Apéndice II), los Estados del área de distribución se comprometen a concertar acuerdos a fin de mantener o restablecer las especies de que se trate en un estado favorable de conservación. Uno de los acuerdos adoptados en el marco de la Convención es el Acuerdo sobre la Conservación de Aves Acuáticas Migratorias Africanas y Euroasiáticas (1995), que contempla la adopción de medidas concertadas por parte de los Estados del área de distribución (117 países, que abarcan desde las regiones septentrionales del Canadá y la Federación de Rusia hasta el extremo sur de África) para todos los sistemas migratorios de las 172 especies de aves acuáticas que abarca.



### **6.3.-Legislación y jurisprudencia de la Comunidad Europea**

Entre las iniciativas adoptadas a nivel regional, la legislación de la CE en materia de medio ambiente merece un examen más detenido, puesto que el carácter particular del sistema jurídico de la Comunidad determina una más rápida y eficaz integración de sus normas en las leyes nacionales si se les compara con la legislación internacional, para lo que en general es necesaria la aceptación oficial por los países individuales antes de que pueda entrar en vigor. En los tratados que establecen las Comunidades Europeas, los Estados miembros de la CE se han adherido a la aplicación directa de la legislación emanada por las instituciones comunitarias, o se han comprometido a adoptar medidas adecuadas para su aplicación. La existencia de un sistema judicial al que están sujetos todos los países miembros contribuye a fortalecer las obligaciones que se derivan de la legislación de la CE.

Como consecuencia de ello, las normas de la Comunidad en materia de medio ambiente han tenido un impacto considerable en los sistemas jurídicos de sus países miembros. En el caso de algunos de ellos, los progresos realizados en la promulgación de marcos jurídicos adecuados en favor de la protección del medio ambiente y la ordenación sostenible de los recursos naturales han sido en gran parte el resultado de las iniciativas de la Comunidad. Al mismo tiempo, la legislación sobre medio ambiente de carácter más progresivo adoptada o en vías de adopción en algunos Estados miembros ha servido de incentivo para que las instituciones comunitarias emanaran disposiciones sobre los mismos temas, determinando así un ulterior impacto positivo en la legislación de todos los países miembros.

Asimismo, la legislación de la CE sobre medio ambiente ha afectado a la legislación de países terceros, y por diversas razones (condiciones para la fase previa a la adhesión, participación de programas de financiación a los que pueden

tener derecho, etc.) está en marcha un proceso de «aproximación» de su legislación a la de la CE.

La legislación adoptada por la Comunidad hasta la fecha en relación con la conservación de la naturaleza ha limitado su ámbito de acción a aspectos específicos - fundamentalmente la protección de las especies y los hábitats de particular interés -, sin extenderse a otros como la ordenación general de la fauna silvestre, la caza y los aspectos conexos como las disposiciones en materia de tenencia, la accesibilidad a las tierras privadas con fines de caza (salvo por lo que se refiere a las especies y métodos prohibidos), el tamaño de las explotaciones, etc. Las directivas son el instrumento jurídico más utilizado, ya que permiten a los Estados miembros decidir la forma y los medios de aplicación, siempre y cuando se alcance el objetivo común. Las más importantes son la Directiva del Consejo 79/409/CEE, en su forma enmendada, relativa a la conservación de las aves silvestres, conocida como la Directiva de Aves, y la Directiva del Consejo 92/43/CEE del 21 de mayo de 1992, en su forma enmendada, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, conocida como la Directiva de Hábitats.

#### **6.4.-La Directiva de Hábitats**

La Directiva de Hábitats es el instrumento legislativo más exhaustivo que la Comunidad haya adoptado en materia de vida silvestre. Como reza la Directiva, su objetivo principal consiste en favorecer el mantenimiento de la biodiversidad al tiempo que se tienen en cuenta las exigencias económicas, sociales, culturales y regionales (preámbulo). La Directiva prevé la designación de zonas especiales de conservación con objeto de restablecer o mantener los hábitats y especies naturales de interés comunitario (que se enumeran en los Anexos I y II, respectivamente) con un estado de conservación favorable, con miras a crear una

red ecológica europea coherente denominada «Natura 2000». En el caso de especies que requieran un territorio extenso, los mencionados lugares que se propongan corresponderán a los lugares concretos, dentro de la zona de distribución natural de tales especies, que presentan los elementos físicos o biológicos esenciales para su vida y reproducción (art. 4).

Sobre la base de los criterios fijados en el Anexo III de la Directiva, la Comisión ha de establecer un proyecto de lista de los lugares de importancia comunitaria de acuerdo con los Estados miembros. Conforme a un procedimiento específico (que se describe en el artículo 21), que supone la asistencia de un comité integrado por representantes de los Estados miembros, se adopta la lista de los lugares seleccionados, en que se determinen aquéllos que presenten uno o más tipos de hábitats naturales prioritarios o de especies prioritarias (art. 5(2)). Los Estados miembros deben dar a tales lugares la designación de zonas especiales de conservación lo antes posible (art. 4(4)) y fijar las necesarias medidas de conservación, que impliquen, en su caso, planes de gestión, que pueden ser específicos a los lugares o estar integrados a otros planes de utilización de tierras (art. 6(1)).

#### **6.5.-Decisiones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas**

Las Decisiones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas relativas a la aplicación de la Directiva de Aves y la Directiva de Hábitats han reforzado las obligaciones previstas en estas últimas, exigiendo su puntual aplicación por los Estados miembros. Por lo general, el Tribunal ha mantenido la postura adoptada por la Comisión, que ha sido muy rigurosa en lo que concierne a la aplicación de tales directivas, habida cuenta de su papel de tutor de la aplicación de la legislación comunitaria.

En muchos casos, se condenó a los gobiernos nacionales porque se consideró que sus leyes internas no cumplían satisfactoriamente los requisitos de las Directivas. En el caso de la Comisión contra Francia de 2000[8], se consideró que el Gobierno francés había violado la Directiva de Hábitats, pues no había adoptado leyes específicas para la aplicación el artículo 6(3) y (4), relativo a la evaluación de las repercusiones de los planes y proyectos que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesarios para la misma, pueden afectar de manera apreciable a las áreas especiales de conservación. No se consideró satisfactoria la existencia de disposiciones adecuadas sobre la evaluación del impacto ambiental en el sistema jurídico francés, pues ninguna de ellas prescribe una evaluación del impacto ambiental a la luz de los objetivos de conservación específicos para un lugar determinado.

La Comisión adujo asimismo que los Estados miembros están en la obligación de adoptar disposiciones explícitas que obliguen a las autoridades nacionales competentes a aplicar las medidas de protección y conservación previstas en el artículo 6(1) y (2) en las áreas especiales de conservación, un parecer que comparten muchas asociaciones ecológicas de los Estados miembros, preocupadas por la inercia de las autoridades encargadas. En cambio, el Gobierno de Francia sostenía que su sistema jurídico contaba con diversas medidas que en general aseguraban la puesta en práctica de los objetivos de la Directiva. Aún así, en relación con este aspecto específico, el Tribunal no emitió decisión alguna, pues se consideró que la cuestión rebasaba el alcance de los procedimientos inicialmente definidos.

Otras leyes que según la Comisión no cumplen debidamente la Directiva de Aves son las disposiciones que presuntamente establecen un régimen de protección simplemente estableciendo un área de protección especial como zona de dominio público o reserva de caza, a falta de medidas concretas que abarquen otros

sectores además de la caza. La protección basada en leyes relacionadas con la ordenación de los recursos hídricos y que trata de ella de forma exclusiva, así como la protección basada en medidas «agroambientales» voluntarias de la CE, también se consideran insatisfactorias en cuanto al cumplimiento de la Directiva.

En otros casos, el Tribunal consideró inadecuada la efectiva aplicación por algunos Estados miembros, por ejemplo respecto de la selección de los lugares o la presentación de los datos previstos. En el caso de la Comisión contra los Países Bajos, la Comisión reclamó la violación por ese país de la Directiva de Aves, pues se habían clasificado como áreas de protección especial un número de hábitats muy inferior al indicado en el Inventario de las zonas importantes para las aves de la Comunidad Europea de 1989. Por su parte, el Gobierno de los Países Bajos adujo que a fin de identificar las presuntas violaciones de la Directiva habría sido necesario llevar a cabo un examen de cada zona específica, para poder tomar en consideración su posible clasificación como área especial de conservación. El Tribunal consideró que la clasificación efectuada por los Países Bajos (23 áreas para un total de 327 602 ha, frente a 70 áreas para un total de 797 920 ha determinadas en el Inventario de 1989) excedían manifiestamente del poder discrecional otorgado por la Directiva a los Estados miembros<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Véase sin embargo al respecto el parecer de la CE en el caso de la Comisión contra Francia, en la sección 2.3.4. infra.

## **7-. PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN DE LA FAUNA**

### **7.1.-Restricciones de la caza**

Las cuestiones jurídicas relativas a la caza se tratan en otras secciones, como las que vierten sobre la reglamentación de la caza (sección 3.3.), licencias (sección 3.4.) y propiedad de la fauna (capítulo IV). La presente sección se limita a tratar los aspectos que no se abordan en otras partes.

Entre las normas sobre protección más comunes figuran las que establecen prohibiciones aplicables a la caza, que son de tipos diferentes. Los límites a la cantidad de animales que pueden cazarse (por ejemplo, con una sola licencia o dentro de un período determinado) no son comunes en las leyes, pues con más frecuencia forman parte de los reglamentos o se incorporan en las condiciones de las licencias.

Las restricciones de tiempo son muy comunes. La mayor parte de las leyes prohíben la caza desde el atardecer hasta el alba. También es usual el establecimiento de temporadas de caza y de veda, si bien con mayor frecuencia mediante disposiciones reglamentarias. Cuando se adoptó la ley vigente sobre caza, en 1992, en Italia se decidió establecer directamente en la ley las temporadas de caza para diversas especies, y permitir a las regiones su modificación con sujeción a determinadas condiciones (art. 18(2)).

Por lo que atañe a las limitaciones de los lugares, esta cuestión se trata en el capítulo V sobre áreas protegidas, en el cual se brindan algunos ejemplos de áreas protegidas que poseen ciertas finalidades específicas de ordenación de la fauna, y en el capítulo IV sobre propiedad de la fauna, pues en algunos países se

otorgan a los terratenientes derechos exclusivos de caza, mientras que en otros se permite la caza en general con menores restricciones, incluso en tierras privadas.

Respecto de los métodos y armas de caza, en la mayor parte de las leyes examinadas se hallan las mismas prohibiciones, como ocurre por ejemplo en el caso de la utilización de drogas, venenos, armas explosivas, del fuego y la caza desde vehículos. Aún así, los métodos de caza por lo general son parte de las tradiciones locales y por ello las demás prohibiciones en este sentido pueden variar considerablemente de un país a otro.

En los países en que la caza todavía contribuye a la subsistencia, se prevén exenciones de las prohibiciones de caza a fin de dar cabida a las prácticas tradicionales. La Convención de Bonn sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres, de 1979, ya autorizaba excepciones a este régimen para finalidades que incluían las necesidades de actividades tradicionales de subsistencia de los usuarios de las especies protegidas (art. 3).

En las sociedades africanas tradicionales, por lo general no era necesario prohibir la caza pues esta actividad a menudo era parte de sistemas de ordenación consuetudinarios que por su misma naturaleza rara vez podían producir efectos negativos en la conservación de la vida silvestre[. El gradual asentamiento de manera estable en ciertas zonas hizo desaparecer la rotación de las zonas de caza, pero dio lugar además a modificaciones del hábitat, un incremento de la agricultura y posteriormente de la economía de mercado. Este hecho supuso asimismo un incentivo para destruir los animales «nocivos», y en general la pérdida de respeto hacia los animales salvajes. Estos diversos factores y la tendencia a instaurar la propiedad estatal de las tierras y los recursos silvestres han ocasionado la desaparición de los regímenes tradicionales de ordenación y caza de la fauna, y han dado lugar al establecimiento de leyes que prevén una

serie de prohibiciones de caza. En la actualidad, las exoneraciones de tales prohibiciones encaminadas a permitir las prácticas tradicionales, con frecuencia se limitan a determinadas especies (por lo general animales de pequeñas dimensiones) y a las zonas donde residen los cazadores, excluidas las finalidades comerciales[25].

Por ejemplo, la ley de 1997 de Burkina Faso autoriza expresamente la caza de subsistencia o tradicional para las comunidades locales a condición de que ello se haga para asegurar la subsistencia (art. 11(5)). En el Camerún, la caza tradicional (que se define como la caza efectuada con medios de origen «vegetal») es «libre» en todas las tierras salvo en las propiedades privadas, si bien en las áreas protegidas puede estar sujeta a reglamentos específicos. Los animales que se cazan con medios tradicionales no pueden utilizarse para finalidades comerciales (art. 24).

La cuestión concerniente a si y hasta qué punto deberían autorizarse determinados métodos de caza porque son «tradicionales», aunque sean más destructivos que las prácticas más habituales, es también uno de los temas más debatidos en los países europeos. Italia, por ejemplo, al adoptar en 1992 la ley actualmente vigente, decidió especificar los métodos de caza permitidos, reduciendo así paulatinamente otros métodos que se habían practicado hasta entonces, por lo general en zonas específicas, causando descontento en los cazadores deportivos. Muchas personas siguen alegando que algunos métodos tradicionales no están en conflicto con la conservación de la fauna, y que debería efectuarse caso por caso una evaluación del impacto que efectivamente producen en las especies de que se trate. El debate sigue estando abierto y se está nuevamente examinando un proyecto de ley a fin de abolir algunas prohibiciones actualmente vigentes.



## **7.2.-Protección de especies específicas**

Las leyes que establecen normas sobre protección pueden limitar su alcance a las especies más valiosas o raras, o extenderse a especies de aparente menor interés, a la vida silvestre o a la biodiversidad en su conjunto. El mecanismo jurídico destinado a la protección de especies específicas consiste con frecuencia en disponer la clasificación de los animales que deben recibir protección en grados diferentes y por consiguiente la creación de listas específicas. Este enfoque es muy común y en algunos lugares sigue siendo el principal instrumento de protección. Sin embargo, con frecuencia está acompañado de la formulación de principios de conservación de mayor amplitud.

Por ejemplo, en la ley de Guinea de 1997 se exige que se garantice la conservación de la fauna a través de un medio ambiente favorable y la ordenación sostenible (art. 4). Existe además la obligación de mantener o restablecer hábitats suficientemente diversos para tal fin (art. 5), y la especificación de que la ordenación racional conlleva el mantenimiento de niveles de población satisfactorios. Los decretos de aplicación de la ley deben comprender listas de las especies que reciben protección parcial o total (arts. 47 y 56). También la ley de Burkina Faso prevé un sistema en que, por decreto del Consejo de Ministros, las especies pueden incluirse en una lista «A», de especies completamente protegidas, o en una lista «B», de especies parcialmente protegidas. En todo caso, las especies que no se hallan incluidas en las listas están parcialmente amparadas pues se benefician de las medidas de salvaguardia generales de la fauna silvestre (arts. 103-111).

En China, la ley de 1988 persigue la finalidad específica de proteger las especies silvestres raras o casi en extinción, si bien prevé también la norma general de mantener un equilibrio ecológico (art. 1). En otras disposiciones la protección se

extiende a las especies beneficiosas o de elevado valor científico o económico. Además, se establece lo necesario para elaborar las listas de las especies en dos clases diferentes, que debe proponer la administración a cargo de la vida silvestre y aprobar el consejo de Estado. Asimismo, las provincias, regiones autónomas o municipalidades pueden adoptar listas de animales silvestres amparados por un sistema local de protección especial (art. 9). En Tayikistán, la ley de 1994 prevé un uso racional y de base científica de la fauna así como la preservación de la biodiversidad (art. 1). Los animales en peligro de extinción o raros deben indicarse en un «Libro Rojo» (art. 47).

En Chile, la ley promulgada en 1996 establece una serie de categorías de especies silvestres que por reglamento deben enumerarse en listados (art. 3). La transferencia de una especie hacia una categoría cuya caza está permitida requiere un estudio de la población que indique la ausencia de consecuencias negativas para la conservación de esa especie (art. 27). En el Uruguay, está vigente la prohibición general de cazar, mientras que en el Decreto 164/996 (art. 10) se enumeran las especies para las que se prevén excepciones. Pueden capturarse otras especies con sujeción a restricciones adicionales, como se especifica en el Decreto 165/996. La legislación de España (1988, 1997) prevé un registro nacional de las especies amenazadas en que deben enumerarse, bajo categorías específicas, los animales que han de protegerse (arts. 29 y 30).

En algunos países la lista de especies protegidas queda establecida en la propia ley principal. Como botón de muestra cabe mencionar el caso de Benin (leyes de 1987 y 1993), Mauritania (ley de 1997) y el Camerún (ley de 1994). En este último caso, el decreto de 1995 (art. 14) exige que la clasificación fijada en la ley (art. 78) se actualice como mínimo cada cinco años. En Botswana, la ley de 1992 indica en un anexo específico los listados de los «animales silvestres protegidos» y «animales silvestres parcialmente protegidos» (arts. 17 y 18). Por norma general

se prohíbe la caza de cualquier animal, si se exceptúan los invertebrados no designados que viven fuera de los parques nacionales y con fines de uso doméstico (art. 19). Algunas leyes especifican las especies silvestres cuya caza está permitida o prohibida, como en Bélgica (ley sobre caza de 1997, art. 1bis, y decreto sobre caza de 1991 de la región flamenca, art. 3) y en Italia (ley de 1992, art. 2), o prevén disposiciones para la elaboración de listas, como en Albania (ley de 1994, art. 32).

En otros casos las leyes permiten una mayor flexibilidad respecto de la determinación de las especies que necesitan protección especial, formulando principios generales de conservación o simplemente incluyendo, y no exigiendo, la posibilidad de designar especies protegidas. Esto ocurre en Malawi (ley de 1992, art. 43) y Uganda (ley de 1996, art. 28). Entre las finalidades expresamente indicadas en la ley de Malawi figura la conservación de la fauna con objeto de mantener un nivel óptimo de número y diversidad de especies, y fomentar así su utilización sostenible (art. 3(1)).

La tendencia general de concentrar la protección en las especies más valiosas y visibles con frecuencia conlleva una menor protección de otros mamíferos, o la falta de ella. En el Reino Unido, en lo concerniente a insectos, peces, anfibios y reptiles, por lo general se protegen únicamente las especies amenazadas o en peligro, con unas cuantas excepciones en el caso de algunos reptiles comunes[26]. A diferencia de ello, en Lituania la definición de fauna silvestre hecha en la ley de 1997 abarca especies tanto vertebradas como invertebradas (art. 1). Algunas regiones italianas, como Emilia Romagna, han adoptado leyes específicas para la protección de «animales menores».

Es difícil determinar a partir del mero análisis de las leyes si los diversos ejemplos de disposiciones de que se tiene noticia garantizan eficazmente la protección de

los animales salvajes. Existen indudablemente ciertos riesgos de ineficacia cuando una ley tiene como efecto la protección de algunas especies exclusivamente, pues como es natural las especies no deberían considerarse separadamente de otras especies interrelacionadas y sus hábitats. En especial, corren el riesgo de ser ineficaces las leyes que establecen listas de especies protegidas directamente en la ley principal, ya que puede ser más difícil modificar las listas en comparación con otros casos. Aunque por lo general las leyes que prevén listas de las especies protegidas no dejan de contener principios de protección amplia, el hecho de que decisiones de gestión tan importantes como las que atañen a elaboración de listas de especies protegidas ya se adopten en la ley misma priva a la subsiguiente planificación de la ordenación de la fauna de gran parte de su relevancia. Puede afirmarse lo mismo en relación con las leyes que establecen temporadas de caza y de veda. Si bien deben estar sujetas a la ley, las actividades de ordenación deberían adaptarse en forma creciente a las exigencias que es preciso satisfacer para lograr la sostenibilidad<sup>8</sup>.

La eficacia de esas normas depende también de las excepciones autorizadas por la ley y de cómo se llevan a cabo en la práctica - es decir, si las exenciones quedan a la discreción de la administración o se permiten para fines específicos (como la investigación científica), pero sin prever medios adecuados para impedir abusos. Estos medios pueden incluir no sólo sanciones adecuadas sino también una mejor formulación de las leyes con miras a prevenir violaciones y abusos. Por

---

<sup>8</sup> Harrop (2000) cita *Iacerta vivipara* y *Anguis fragilis* como los únicos casos de reptiles que reciben protección, si bien señala que aunque no pueden eliminarse o herirse, no está prohibida su captura. En un análisis de la legislación de la CE y el Reino Unido el mismo autor (1999) observa que, paradójicamente, la ley sobre conservación de especies y hábitats puede frustrar el intento de una preservación amplia de la diversidad biológica debido al hincapié que se hace en algunas especies en detrimento de otras, o porque no se abordan las relaciones globales entre las especies. La incapacidad de preservar un «representante común» de la diversidad biológica puede dar lugar a la pérdida de los componentes claves de los ecosistemas.

ejemplo, podrían reforzarse las interdicciones mediante la prohibición de poseer (y no sólo capturar) especímenes o partes de especies protegidas. Asimismo, puede contribuir a una eficaz aplicación de la ley la formulación de una definición adecuada de la caza, que comprenda el deambuleo con armas de fuego, como se hace en las leyes de Guinea (art. 2) y de Mauritania (art. 7).

### **7.3.-Evaluación de los procesos perjudiciales**

Como reflejo de la reciente evolución del derecho internacional, en diversas leyes nacionales se ha comenzado a exigir la evaluación y reducción de todo proceso que pueda perjudicar la fauna silvestre, dejando de limitar su alcance estrictamente a la protección y ordenación. En Malawi, por ejemplo, se prevé una evaluación del impacto en la fauna silvestre en relación con todo «proceso o actividad» que pueda producir un efecto adverso en la fauna. Si bien únicamente el Ministro puede emprender la evaluación, cualquier persona que tenga motivos para creer que se producirá un efecto de ese tipo puede presentar una solicitud para llevarla a cabo. Este proceso da lugar a la presentación de un informe que debe incluir recomendaciones sobre las medidas que el gobierno ha de adoptar posteriormente (arts. 23-25). En Uganda, las personas que deseen emprender proyectos que podrían tener efectos significativos en una especie o comunidad de especies silvestres deben realizar una evaluación de impacto ambiental (art. 16). En China, se exige la vigilancia de los efectos ambientales en la fauna, y en los casos en que una actividad pueda perjudicar la vida silvestre, la administración que se encarga de ella y las demás administraciones de que se trate deben abordar conjuntamente la materia (art. 11).

En Australia, la ley adoptada en 1999 prevé el listado de los procesos perjudiciales más importantes. El Ministro debe cerciorarse de que se haya establecido un «plan de recuperación» para cada especie amenazada y comunidad ecológica

enumeradas, y que se adopte un «plan de reducción de las amenazas» en relación con los procesos perjudiciales más importantes, cuando sea apropiado (art. 183). La ley de Lituania de 1997 prevé que al planificar y ejecutar toda actividad de carácter económico, se deben adoptar medidas para mitigar el impacto en los hábitats, las condiciones de reproducción y las rutas migratorias de la fauna (art. 6). Toda evolución que pueda tener un efecto importante en las especies o comunidades silvestres está sujeta a una evaluación de impacto ambiental (art. 16).

Algunos países exigen específicamente la realización de evaluaciones del impacto ambiental de las actividades que puedan afectar a las áreas protegidas. El decreto de 1995 del Camerún (art. 21) y la ley de Guinea (art. 40) ofrecen algunos ejemplos a este respecto. La Directiva de Hábitats de la CE prevé una evaluación específica de las repercusiones que pueden tener las actividades pertinentes en los lugares que deben ser objeto de protección en virtud de la misma Directiva. Dicha evaluación debe efectuarse específicamente en vista de los objetivos de conservación del lugar y este proceso difiere por ende del proceso de evaluación general del impacto ambiental, de acuerdo a lo que disponen leyes separadas[27].

La CE y Suiza han apoyado asimismo la realización de prácticas agrícola no intensivas, con miras a reducir su impacto en el medio ambiente y la vida silvestre, mediante la disposición de subvenciones específicas. En el Reino Unido se promueven activamente las actividades que, al reducir el impacto de la agricultura en el suelo y los insectos, redundan en beneficio de la conservación de la fauna silvestre.

#### **7.4.-Protección de la biodiversidad**

En múltiples sistemas jurídicos se abordan actualmente los temas de la protección y ordenación de la biodiversidad, mediante la incorporación de los objetivos de interés en la legislación relativa al medio ambiente o la vida silvestre, o mediante la adopción de leyes específicas distintas.

Costa Rica figura entre los países que adoptaron una ley específica en materia de biodiversidad, en 1998. Dicha ley establece principios generales (art. 9) y dispone la creación de una comisión nacional que se encargue principalmente de la elaboración de políticas y la coordinación entre los diversos organismos competentes (arts. 14-21), así como la creación de un sistema nacional de áreas de conservación con una estructura administrativa conexas (arts. 22-43). Se reglamenta además el acceso a los componentes genéticos y bioquímicos de la biodiversidad in situ y ex situ, con lo que se persigue entre otros el objetivo de salvaguardar el derecho de las comunidades locales de recibir suficiente información y de oponerse, si así lo desean, a las actividades previstas (arts. 62-76).

En su ley sobre medio ambiente y biodiversidad de 1999, Australia estimula la identificación y vigilancia de la diversidad biológica, con la finalidad de identificar y seguir los componentes que revisten importancia para su conservación y aprovechamiento sostenible, o cuya comprensión no es adecuada, o con objeto de acopiar información útil adicional, aportando asistencia financiera o de otro tipo para tal fin (art. 171).

La ley se centra en particular en la planificación y, para ello, establece diversos tipos de planes que deben o pueden adoptarse. Los «planes bioregionales» que pueden elaborarse incluyen disposiciones sobre los componentes y el estado de la

biodiversidad y los valores económicos y sociales importantes, así como los objetivos relacionados con la biodiversidad y otros valores, y fijan los objetivos prioritarios que deben conseguirse. El ministro competente debe tener en cuenta esos planes a la hora de adoptar cualquier decisión que guarde relación con ellos (art. 176). Es obligatorio adoptar «planes de recuperación» a favor de las especies amenazadas enumeradas, así como es posible llevar a cabo «planes de reducción de las amenazas» para los procesos perjudiciales más importantes (art. 183). Pueden adoptarse «planes de conservación de la fauna silvestre» para las especies migratorias enumeradas, las especies marinas indicadas, cetáceos que viven en el refugio para las ballenas de Australia y especies que dependen de la conservación (art. 285).

Además, muchos países como el Camerún, España e Irlanda han incorporado la obligación de proteger la biodiversidad en su legislación relativa a la protección del medio ambiente, la vida silvestre o las áreas protegidas.

Un problema que debería prevenirse cuando se adoptan leyes en materia de biodiversidad consiste en la posibilidad de superposiciones o conflictos con leyes sectoriales relativas a recursos naturales específicos, que son a su vez elementos de la diversidad biológica. Por lo que se refiere a los planes y autorizaciones relacionados con los recursos naturales, incluida la fauna, la ley de Costa Rica prevé que toda institución central o local que los expida tenga debidamente en cuenta la conservación de la biodiversidad (art. 52). Sin embargo, en lo que respecta a disposiciones específicas sobre acceso a los recursos genéticos, según parece es inevitable que se produzca cierta superposición.



## **7.5.-Planificación de la ordenación**

Las leyes más recientes en materia de fauna silvestre dedican algunas disposiciones a la planificación de la ordenación, indicando la dinámica básica del proceso de gestión y abordando el tema de la protección así como la explotación sostenible. Con frecuencia prevén la elaboración de estudios de las poblaciones animales y de los hábitats, así como la adopción oficial de planes de ordenación. A continuación se ofrecen algunos ejemplos de este proceso<sup>9</sup>.

La ley española comprende principios básicos de ordenación de los recursos naturales y de la biodiversidad, estipulando que las administraciones competentes formulen planes de ordenación de los recursos naturales, con contenidos detallados, que han de prevalecer por encima de cualquier otro instrumento de planificación que pueda aplicarse en esas mismas zonas (arts. 4 y 5). La caza está sujeta a un «plan técnico» encaminado a la protección de los animales, que debe adoptarse de conformidad con la legislación regional (art. 33).

En el Portugal, la ley de bases relativa a la caza prevé la adopción de planes de gestión de la caza para las zonas que puedan considerarse como unidades biológicas para determinadas poblaciones de animales y en el caso de un intenso paso de especies migratorias (art. 13). Dispone asimismo que las temporadas de caza se fijen teniendo en cuenta los períodos de reproducción de cada especie (art. 8).

---

<sup>9</sup> Ly (FAO, 2001) lamenta que no todos los países de África occidental aborden la caza tradicional en su legislación, lo que representa un planteamiento que inapropiadamente deja de tomar en consideración las necesidades de subsistencia.

En el decreto de 1995 del Camerún se prevé la posibilidad de preparar planes de ordenación para la utilización sostenible de uno o más recursos silvestres (art. 2(3)), así como la ejecución de planes de caza que establezcan más concretamente las cuotas permitidas de caza y otras condiciones para esta actividad (art. 2(4)). En virtud de la ley de Guinea, las especies cuyo estado lo permita, pueden cazarse de conformidad con las normas sobre ordenación que velan por el desarrollo o mantenimiento de las poblaciones existentes (art. 42).

En Albania, la ley prevé la preparación de planes de ordenación de la fauna que cumplan criterios científicos y sobre los que deben basarse los planes de caza anuales (art. 13). En la ley de la Lituania, existe la obligación de mantener un «catastro» nacional de la fauna silvestre, con información de utilidad sobre las especies, condiciones, aprovechamiento, etc., a fin de velar por la utilización racional de la fauna (art. 25). En Tayikistán, la ley estipula que las medidas del caso deben basarse en el seguimiento y los datos disponibles, algunos de los cuales deben proporcionarlos los «usuarios de los objetos del mundo animal», puesto que los usuarios tienen la obligación, entre otras, de registrar el número y las condiciones de los especímenes capturados o utilizados (art. 38).

En Malawi, el Ministro debe asegurar que las medidas adoptadas en virtud de la ley se basan en los resultados de investigaciones científicas, incluida la vigilancia de las condiciones de las especies y sus hábitats (art. 3(2)). La concesión de todo derecho de utilizar los recursos silvestres está sujeta a los planes de ordenación aplicables (art. 33(3)(c)). En China, la ley por lo general requiere la elaboración de estudios sobre el estado de los animales silvestres (art. 15), así como el seguimiento de todo impacto ambiental en la fauna. En los reglamentos se estipula asimismo que deben determinarse las especies que pueden cazarse, sobre la base de la situación que afrontan las especies no protegidas en ese momento y con sujeción al principio de aprovechamiento sostenible (regla 16).

En Francia, con arreglo a la ley de 1993, se mantiene un «inventario nacional del patrimonio biológico», junto con inventarios a nivel local (art. 23). Las disposiciones del código rural prevén la adopción de un schéma départemental de gestion cynégétique, con la cooperación de los propietarios, encargados de la ordenación y usuarios. El plan debe comprender planes de caza y ordenación, el límite máximo de animales que pueden cazarse, las medidas que deben adoptarse respecto de los predadores, la conservación de los hábitats, etc. (art. L-221). Para algunas especies, es preciso adoptar planes a nivel nacional (art. L-225).

En Italia, el Instituto Nacional para la Fauna Silvestre, órgano establecido por ley que desempeña funciones de investigación, capacitación y asesoramiento para el Estado y las autoridades locales, está encargado de efectuar estudios sobre el estado de la fauna silvestre y su evolución y sobre las relaciones con otros componentes del medio ambiente (ley de 1992, art. 7). Todas las tierras agrosilvopastorales están sujetas a la planificación de la ordenación de la fauna y la caza, que las autoridades locales deben llevar a cabo. No obstante, no se exige explícitamente que la planificación esté vinculada a los resultados de los estudios. Además, la ley ya fija fechas en cuyo ámbito cada año pueden cazarse las especies indicadas, así que al parecer no hay mucho margen para planificar esta materia. Sin embargo, se autoriza a las regiones modificar dichas fechas, a la luz de exigencias locales particulares, con reserva de una opinión positiva al respecto del Instituto Nacional para la Fauna Silvestre y la adopción previa de planes adecuados de ordenación (art. 18(1) y (2)).

De este análisis se desprende que se han hecho progresos considerables en comparación con leyes anteriores que generalmente limitaban las disposiciones en materia de ordenación de la fauna a prohibiciones básicas aplicables a la caza. Las leyes indicadas en los ejemplos mencionados pueden representar importantes instrumentos de ordenación, pues sirven de orientación a las administraciones

para que adopten las decisiones del caso de manera racional y transparente. Aún así, en ocasiones la ley incluye las condiciones pertinentes sólo en forma fragmentaria y no con una secuencia lógica. El proceso completo debería abarcar una evaluación del estado de los recursos, seguida de la adopción de planes basados en resultados actualizados y de una ordenación sujeta a lo previsto en los planes, pero en la legislación no siempre se establecen claramente estos pasos tan sencillos. Otra deficiencia radica en que algunos países limitan el requisito de planificar la ordenación únicamente a las finalidades de caza y a los animales que pueden cazarse y no lo extienden hasta abarcar una perspectiva general de la ordenación de la fauna silvestre.

## **7.6.-Reglamentación de la caza**

En muchos países la caza desempeña una importante función económica y social, pues puede constituir una fuente significativa de alimentos e ingresos. Incluso en los casos en que no es así, a menudo continúa siendo un deporte popular. En muchos países europeos donde la caza cuenta con el apoyo de poderosos grupos de interés, la ordenación de la fauna y, por consiguiente, la adopción de la legislación pertinente suele ser tema de un debate político animado. Con frecuencia los problemas en cuestión se reducen simplemente a la pregunta si se debería o no permitir la caza, ya sea en general o, más comúnmente, en relación con ciertas especies, en zonas determinadas o en ciertos períodos del año. En la práctica, esta situación ha tendido a reducir la ordenación de la fauna a dos opciones: la caza o la prohibición de la misma.

Aunque se trata de un enfoque inadecuado, sigue siendo evidente en la legislación de algunos de estos países, que en lugar de ocuparse formalmente de la protección general de la fauna, continúan concentrándose principalmente en las especies que son de interés para la caza. Un ejemplo de este enfoque es la ley

italiana, que formalmente aborda la protección de los animales silvestres y la caza, pero se centra en esta última y, en todo caso, se limita explícitamente a los animales de sangre caliente. Sin embargo, actualmente se halla en examen una ley amplia la ordenación de la fauna.

Otros países europeos, entre los cuales Alemania, Dinamarca, Finlandia y algunos Länder austriacos, poseen leyes diferenciadas sobre la protección de la naturaleza y sobre la caza. En dichos casos, lo ideal sería que las disposiciones generales acerca de la protección y ordenación de la fauna, que normalmente están incluidas en la ley de protección de la naturaleza, estuvieran adecuadamente integradas con las disposiciones sobre la caza. En algunos casos, sin embargo, estas dos partes de la legislación parecen actuar aisladamente, es decir, la relativa a la protección de la fauna se aplica con arreglo a una exclusión expresa de las especies que pueden cazarse.

No obstante, a este respecto en los últimos años se han aportado mejoras a los marcos jurídicos. Por ejemplo, es interesante observar que en el Land austriaco de Styria la ley sobre la protección de la naturaleza, hasta su enmienda de 2000, todavía concebía la protección de los animales por separado de la ordenación de la caza, y establecía que los animales salvajes en riesgo de extinción u otros que requerían protección debían ser protegidos, pero excluía expresamente la caza mayor (art. 13).

En todo caso, la reglamentación de la ordenación de la fauna queda sujeta a las presiones de tres grupos de presión tradicionales como mínimo, esto es, los cazadores, los agricultores y los ambientalistas. Entre los temas de discusión se hallan varias prácticas que suelen recibir el apoyo de los cazadores (cuyos intereses a veces pueden coincidir con los de los agricultores en cuanto a la caza de especies perjudiciales para los cultivos), y a veces están permitidas por la ley.

Un ejemplo es el debate relativo a los métodos de caza tradicionales y la medida en la cual deberían autorizarse en la caza deportiva (véase la sección 3.1.1. supra).

Otros ejemplos son la ordenación de la fauna con vistas a la obtención de los trofeos mejores, por ejemplo mediante el establecimiento de temporadas de caza orientadas a los trofeos, o a la alimentación de la caza mayor, que produce, entre otros, el deterioro de los hábitats mediante la introducción de nutrientes y el «mordisqueo» de la regeneración forestal. (Späth, 2000).

Otro ejemplo es la repoblación de la fauna a los fines de la caza, una práctica que suele permitirse bastante a menudo, si bien el aumento de las poblaciones de animales silvestres debería obtenerse más bien a través de una mejora general de la ordenación de la fauna y del medio ambiente.

Un último ejemplo es la caza selectiva (o eliminación selectiva) de ciertas especies, incluso en las áreas protegidas, que podría justificarse en situaciones particulares, pero sólo como una opción excepcional que debe mantenerse bajo estricto control científico. En Italia, en las áreas protegidas - donde generalmente la caza está prohibida - se puede permitir la caza selectiva a cazadores autorizados, preferentemente locales, que deben haber seguido un curso específico de capacitación. Este último requisito, establecido por una enmienda de 1998 de la ley de bases sobre áreas protegidas, contribuye a garantizar la participación de personas capacitadas, pero dado la falta de criterios científicos precisos, la cuestión queda sujeta a fuertes presiones políticas.

## **7.7.- Utilización de licencias**

Las licencias u otros tipos de permisos son un instrumento administrativo corriente de la ordenación de los recursos naturales y se utilizan también para los animales salvajes con objeto de autorizar la caza u otros tipos de usos. Las licencias pueden contribuir a la ordenación cuando se utilizan efectivamente para limitar el número de animales que se pueden cazar con una única licencia, basándose en una evaluación periódica de los niveles sostenibles de explotación y en planes adecuados. Sin embargo, son raras las disposiciones que ponen claramente en relación el número de animales que se permite cazar con arreglo a las licencias con los estudios o planes de ordenación, si bien suele dejarse amplia discreción a la administración a este respecto. La ley de Malawi representa un ejemplo en que la discreción de la administración debe guiarse por los intereses de la ordenación de la fauna, pues autoriza al Oficial Principal de Parques y Vida Silvestre a negar una licencia si considera que dichos intereses se atenderán mejor prohibiendo temporáneamente la expedición de licencias de ese tipo (art. 54(1)(e)).

Aunque a menudo existen límites al número de animales que se permite cazar, no se hallan necesariamente de acuerdo con la evolución del estado de la fauna. La ley de Guinea prevé la fijación de dichos límites por vía reglamentaria (arts. 83 y 86).

Un modo en que los sistemas de concesión de licencias pueden contribuir a una ordenación adecuada consiste en solicitar a los titulares de las mismas, para fines estadísticos y de supervisión, la entrega de los datos recopilados al tiempo que actúan con arreglo a licencias. Por ejemplo, la ley de Guinea exige que los titulares de cualquier tipo de licencia mantengan un registro donde debe anotarse cotidianamente toda la información pertinente (arts. 84, 88, 96 y 104), y la legislación de otros países contiene requisitos similares.

La expedición de una licencia puede estar sujeta a una prueba de los conocimientos y las capacidades del solicitante. Esto puede reducir de forma significativa las prácticas inadecuadas de caza y las infracciones a la ley, que pueden deberse a la falta de conocimientos biológicos y jurídicos. No es insólito que la legislación prevea como requisito un examen, especificando temas y otros detalles, como ocurre en el derecho italiano y alemán. En Botswana la posibilidad de evaluar las capacidades del solicitante se deja a la discreción de los oficiales encargados de la concesión de licencias (art. 31(2)(b)). En el Camerún, la ley exige que los solicitantes de una licencia de caza declaren que conocen la legislación y se comprometen a atenerse a ella (art. 38).

Los requisitos para la supervisión de algunas categorías de cazadores, en particular los de caza mayor, por parte de guías de caza, que a su vez necesitan un permiso especial, persiguen fines similares. La legislación de Guinea exige que toda expedición turística de caza esté acompañada por un guía autorizado, que debe haber superado una examen específico. Normas parecidas se aplican en Botswana, donde se concede una mayor discreción al Director de Fauna, que «puede» exigir que los solicitantes superen un examen. Un cazador profesional debe tomar todas las medidas razonables para asegurarse de que los cazadores a los que presta asistencia comprenden y respetan los términos y las condiciones de las licencias o permisos que les han sido otorgados, así como la legislación aplicable, y la responsabilidad de probar que ha cumplido con esa obligación corresponde solamente a él (arts. 43 y 44).

## **7.8.- Otros tipos de licencias**

Normalmente también la captura de animales para fines científicos o educativos está sujeta a un específico tipo de autorización. Ésta se denomina «licencia especial» en Malawi (art. 53), «permiso científico» en Guinea (arts. 99-105), y



existe también en Botswana (art. 39(1)(a)). En este último país es el Director quien debe conceder esos permisos y no los oficiales encargados de la expedición de licencias, mientras que en Guinea las condiciones establecidas son aún más restrictivas puesto que los permisos científicos pueden concederse únicamente a personas pertenecientes a instituciones científicas y si no está permitida la caza, a menos que esté relacionada con la investigación y debidamente autorizada mediante un permiso.

A veces el comercio de animales salvajes, capturados con o sin permiso, está prohibido, como sucede en Italia por lo que respecta a la caza mayor, o requiere una autorización separada, como en Botswana (art. 39(1)(c)) y en Guinea (arts. 89-98), donde hay además una ulterior distinción por lo que concierne a la captura de aves vivas (licencia de oisellerie).

Generalmente la importación y exportación de especímenes vivos o muertos de animales silvestres se hallan reglamentadas por disposiciones específicas que requieren algún tipo de autorización. En Uganda es necesario un permiso para importar y exportar cualquier animal salvaje o parte del mismo (art. 6). En Guinea está prohibida la exportación de las especies que se hallan bajo protección total, salvo finalidades científicas o de conservación (arts. 49, 50 y 53-55), en cuyo caso se aplican las reglas sobre la importación y exportación de animales parcialmente protegidos (arts. 57, 59 y 60).

Normalmente los sistemas de permisos para la importación y exportación de animales están relacionados con la aplicación de la CITES en los países partes en ésta. Las disposiciones pertinentes pueden encontrarse en la misma legislación, como en la concerniente a la ordenación de la fauna y a la caza, pero con frecuencia se hallan en leyes específicas destinadas a la ejecución de la CITES.

## **7.9.-Otras finalidades de las licencias**

Además de contribuir a la ordenación de la fauna los sistemas de concesión de licencias se proponen otros fines. La concesión de licencias puede facilitar la observancia de la legislación. En efecto, a través de la asignación de licencias es posible identificar más fácilmente a los cazadores. Además, la suspensión o cancelación de las mismas en caso de infracciones pueden servir para prevenir éstos o eliminar sus consecuencias.

Cuando se requiere un seguro para cubrir los daños que pueden ocasionar los cazadores, la ley puede exigir que se consiga en el momento de presentar la solicitud o de conceder una licencia específica. Son ejemplo de ello la ley de Guinea, que requiere que los solicitantes de algunos permisos de caza demuestren que han obtenido el seguro por conducto del Director de bosques y fauna (art. 78), así como la ley italiana de 1992 (art. 12(8)). En Guinea también los guías de caza deben estar cubiertos por un seguro específico contra los daños que pueden causar sus clientes a terceros durante la caza (arts. 110-120).

Por último, casi en todas partes y en cualquier sector las licencias representan una fuente de ingresos ya que normalmente se cobran derechos cuando se expiden o renuevan. A menudo se cobran derechos más altos a los extranjeros por los safaris fotográficos o de caza. Además, con frecuencia hay que pagar una entrada para la admisión a las áreas protegidas.

## **7.10.- Cría y reproducción de los animales silvestres**

La cría y reproducción de los animales silvestres pueden representar una contribución importante para la disponibilidad de alimentos e ingresos en las zonas rurales, y pueden tener, asimismo, un impacto significativo en el medio ambiente y

en otros animales, en modo particular, y en la diversidad biológica, en general. Por lo tanto, es importante que el marco jurídico aplicable tenga en cuenta ambas cuestiones e intente alcanzar un equilibrio entre el fomento de esas iniciativas y las cuestiones relativas a la conservación. A continuación se exponen algunos ejemplos de disposiciones pertinentes halladas en la legislación examinada.

La ley (2000) de Colombia relativa a la ordenación de la fauna silvestre se centra principalmente en la creación y el funcionamiento de zoológicos, ya sean abiertos o sea, donde se introducen animales capturados periódicamente en el medio silvestre con vistas a su aprovechamiento -, cerrados - es decir, donde se introduce sólo una pareja inicial -, o mixtos. Se dictan numerosas normas a fin de que esas estructuras posean las condiciones adecuadas para el desarrollo de los animales desde el punto de vista técnico y medioambiental, con detalles sobre la concesión de licencias y la aplicación de la ley.

En Burkina Faso, tanto la cría como la reproducción de los animales están sujetas a una autorización. El reproductor o la administración encargada de la fauna deben vigilar las poblaciones de animales dentro de las explotaciones (ranches) con miras a un manejo racional de las capturas. Las zonas utilizadas para la reproducción de los animales silvestres en cautiverio o semicautiverio deben cercarse. Los animales no son objeto de las restricciones establecidas para la caza y son considerados propiedad del reproductor. En cuanto a las especies que se hallan bajo protección total, su captura y venta están subordinadas a condiciones específicas que deben indicarse en disposiciones reglamentarias<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> El Game Conservancy Trust, una institución de beneficencia que participa extensamente en actividades de investigación y proyectos innovadores relacionados con la ecología de las tierras agrícolas, ha analizado los efectos de la intensificación agrícola en la fauna y los efectos indirectos del uso de plaguicidas en los insectos y sus hábitats. Habida cuenta de que éstos forman la base de muchas cadenas alimentarias de la vida silvestre, la institución ha llevado la delantera en la aplicación de técnicas agrícolas en beneficio de los animales silvestres, como los «bancos de escarabajos» (refugios colocados en la parte media de los campos

En Botswana es necesario un permiso para criar o explotar animales salvajes en fincas, y puede exigirse la construcción de cercas en ellas. Los animales de caza mayor «protegidos» y «parcialmente protegidos» pueden criarse o explotarse sólo en virtud de una autorización específica. Si la zona está cercada no hay límite al número de animales de las especies especificadas que pueden capturarse. De lo contrario, la eliminación selectiva está sujeta a un permiso, que también se exige en el caso de la venta de animales, carne o trofeos

En el Camerún se necesita una licencia tanto para criar los animales en fincas, es decir en áreas protegidas sometidas a ordenación con la finalidad de la repoblación y el posible aprovechamiento para alimentos u otros fines (art. 2(11)), como para la explotación de animales capturados del medio silvestre y colocados en un área controlada con fines comerciales (arts. 2(12) y 53).

En Mauritania la ley permite la creación de fincas (ranches) y de instalaciones para la reproducción de la fauna a los fines de su desarrollo a condición de que no pongan en peligro las zonas circundantes y cualquier otra condición especificada por decreto (art. 20).

En China, además de fomentar la reproducción de animales (art. 17), la ley contiene disposiciones pertinentes relativas a la expedición de licencias; éstas son necesarias para los animales que se hallan bajo protección especial por parte del

---

para los insectos predadores que invaden los cultivos para devorar las especies plaguicidas), la creación de cabos de tierras para la conservación (zonas de áreas externas cultivadas de seis metros que se manejan para permitir la formación beneficiosa de maleza e insectos con miras a beneficiar la fauna), y el cultivo integrado ([www.game-conservancy.org.uk](http://www.game-conservancy.org.uk)).. Du Saussay, en su examen de las leyes de algunos países europeos (FAO, 1980), observó que todas éstas aún se componían de textos basados en leyes sobre la caza, que se habían ido añadiendo uno al otro, y que los legisladores nunca habían examinado la necesidad de proteger la fauna en modo global.

Estado, de acuerdo con los Reglamentos para la aplicación de la ley acerca de la protección de la fauna terrestre (regla 22).

La ley de Albania requiere una autorización para la reproducción de los animales salvajes ya sea en tierra pública o privada. Además, se debe proporcionar el 10 por ciento de la producción anual de animales para repoblar las zonas forestales, sin recibir compensación (art. 15).

En general, las normas citadas respecto a la reglamentación de la cría y la reproducción aspiran a satisfacer consideraciones relativas al medio ambiente y la biodiversidad, puesto que casi sistemáticamente subordinan dichas actividades a una autorización. Asimismo, existe una preocupación justificada sobre la cría y reproducción de las especies protegidas pues las deficiencias en el sistema de control podrían facilitar la violación de la ley relativa a las mismas especies que se hallan en el medio silvestre.

Siempre y cuando esas necesidades se aborden en modo adecuado, sería útil que los marcos jurídicos fueran más favorables en general a las iniciativas privadas o comunitarias referentes a la cría y la reproducción de animales salvajes, evitando prohibiciones innecesarias. Quizá deban establecerse exenciones apropiadas para los animales procedentes de la cría y la reproducción, ya que someterlos a las mismas reglas aplicadas a los que se encuentran en estado salvaje resultaría fácilmente en un freno. La ley también podría prever incentivos para la utilización de las tierras del Estado a estos fines, así como incentivos financieros y de otro tipo. La ley de Burkina Faso presenta uno de los raros ejemplos de disposiciones favorables, pues exime los animales procedentes de la cría y reproducción de las restricciones establecidas para la caza y los convierte en propiedad del reproductor. Disposiciones análogas se hallan también en Botswana.

## **8- PROPIEDAD DE LA FAUNA Y DERECHOS Y OBLIGACIONES CONEXOS**

Una medida tradicional encaminada a la conservación de la fauna es el establecimiento de áreas protegidas donde están prohibidas o controladas las actividades humanas a fin de proteger determinadas especies o hábitats de especies. Más recientemente, la creación de áreas protegidas se ha concebido como parte de un «sistema nacional», o incluso en el marco de una red internacional, más que en formaciones fragmentarias, de modo que se puedan perseguir más eficazmente los objetivos de protección general de la biodiversidad. Este es precisamente uno de los requisitos explícitos del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que entre las obligaciones para la conservación in situ incluye la creación de un sistema de áreas protegidas, aunque éste debe realizarse «en la medida de lo posible y según proceda

Algunas disposiciones que requieren la creación de un sistema nacional se encuentran en la ley de 1998 de Bulgaria (art. 3), la ley de 1995 de Rumania sobre protección del medio ambiente (art. 56), la ley de 1997 del Perú (art. 6), la ley de 1987 de Portugal sobre medio ambiente (art. 29), y la ley nacional sobre el sistema integrado de áreas protegidas de 1992 de Filipinas.

Independientemente de que se establezca o no un «sistema», por lo general la legislación relativa a las áreas protegidas prevé la designación de varios tipos de zonas con fines diversos de protección. En la mayoría de los casos, entre los posibles fines para su creación se incluye la protección y la ordenación de los animales silvestres, si bien algunas leyes proponen ciertos tipos de áreas protegidas destinadas más específicamente a esa finalidad. A continuación se presentan algunos ejemplos.

La ley de Botswana prevé la creación de reservas de caza o refugios para determinadas especies que, dentro de esas zonas, pueden capturarse únicamente para fines científicos (art. 12). También pueden haber «reservas privadas de caza» creadas por petición del propietario, donde la caza o captura de todas o determinadas especies debe estar permitida por él o por personas autorizadas por él, bajo ciertas condiciones (art. 13). Es posible cazar o capturar animales en las «zonas de ordenación de la fauna» y en las «zonas de caza controlada», en este último caso únicamente tras la aprobación específica de una licencia de caza y el pago de derechos correspondientes.

En Burkina Faso existen «reservas de fauna» totales o parciales - donde está prohibida la caza de todas o algunas especies respectivamente -, «refugios locales» - que las autoridades locales pueden reservar en nombre de las comunidades locales para facilitar la reproducción y la explotación de los animales salvajes (art. 95) - y «zonas rurales de interés cinegético» (zones villageoises d'intérêt cynégétique). En Guinea hay «refugios de fauna» para las especies en peligro de extinción (arts. 26-28) y zonas d'intérêt cynégétique para la caza o para fines científicos (arts. 29-31). Mauritania cuenta con reservas naturales destinadas a la ordenación sostenible de los animales, y zonas d'intérêt cynégétique, que se manejan para la caza o el turismo con arreglo a licencias, subordinadas a condiciones establecidas (art. 6).

Entre las áreas protegidas previstas en la ley del Camerún figuran «reservas de fauna» y zones cynégétiques. Las primeras están destinadas a la conservación, ordenación y reproducción de la fauna y su de hábitat, donde la caza puede ser autorizada por el Ministro exclusivamente en el ámbito de operaciones de ordenación autorizadas. Las segundas están reservadas para la caza y pueden estar sometidas a ordenación por la administración encargada de la fauna, una autoridad local o cualquier persona; la caza en estas zonas está sujeta al pago de

derechos (art. 3(1)). La ley también prevé territoires de chasse - cualquier terreno donde la caza está permitida y reglamentada (art. 2(18)) - y territoires de chasse communautaire, tierras del Estado ordenadas por una comunidad local con arreglo a un acuerdo de ordenación (art. 2(19)).

La ley de Albania prevé zonas de repoblación, reservas de caza y reservas de fauna - éstas últimas de protección absoluta (arts. 8 y 9). En la ley portuguesa sobre la caza se tienen en cuenta varios tipos de zonas relacionadas con esta actividad y la ordenación de la fauna: los refugios de caza - para la conservación de ciertas especies y el desarrollo de otros animales que es posible cazar - (art. 7), y cuatro tipos de «zonas de caza»: las de interés nacional, municipal, turístico y las para asociaciones. En este último caso, es posible someter la zona a ordenación en virtud de acuerdos con asociaciones de cazadores, agricultores o ambientalistas, o con las autoridades locales (art. 14). En Italia, la ley de 1992 contempla «reservas de protección», «zonas de repoblación y captura», y «centros públicos y privados para la reproducción de la fauna en el medio silvestre».

### **8.1.- Medidas de protección fuera de las áreas protegidas**

Hay un consenso general según el cual para recuperar y mantener la diversidad biológica es necesario considerar también las zonas que no se hallan bajo protección. Sin embargo, este aspecto raramente está presente en la legislación relativa a la ordenación de la fauna. Las medidas de mejora del medio ambiente concebidas por la Comunidad Europea en consonancia con el plan de acción «Agenda 2000» reflejan esta tendencia en la legislación pertinente (destinada principalmente a establecer oportunidades de financiación), haciendo hincapié en las zonas no protegidas.



También la legislación suiza va más allá del enfoque que se centra en la protección de zonas determinadas y requiere, de ser posible, la protección de la flora y la fauna indígenas mediante un aprovechamiento agrícola y silvicultural apropiado de su espacio vital (biotopo). Con esta finalidad también prevé la cooperación entre las autoridades responsables en materia de agricultura, silvicultura y protección de la naturaleza (ley de 1996, art. 13). La ley contiene un anexo con una lista de especies indicatrices des milieux naturels, que no pretende ser exhaustiva, ya que los cantones pueden adaptarla a las condiciones locales, y debe completarse en varias maneras determinadas. Un mecanismo denominado «compensación» (art. 15) se propone conectar los biotopos aislados mediante la creación de biotopos nuevos. El Gobierno Federal otorga subvenciones para los biotopos regionales y locales de acuerdo con porcentajes determinados (art. 18), y en virtud de una ley separada se conceden subvenciones para las prácticas agrícolas ecológicas.

## **9-. LEGISLACIÓN EXAMINADA SOBRE PROTECCION DE ESPECIES EN VIA DE EXTINCIÓN.**

**(Derecho Comparado)**

### **ALBANIA**

Ley sobre caza y protección de la fauna (ley n° 7875, 23 de noviembre de 1994)

### **ALEMANIA**

Ley federal de conservación de la naturaleza (21 de septiembre de 1998)

Ley federal de caza (29 de septiembre de 1976, en su forma enmendada hasta la ley del 26 de enero de 1998)

### **ARMENIA**

Ley sobre reservas naturales (17 de diciembre de 1991)

### **AUSTRALIA**

Environment Protection and Biodiversity Conservation Act (ley n° 91, 16 de julio de 1999)

### **AUSTRIA**

Ley sobre la protección de la naturaleza de Styria (30 de junio de 1976, enmendada por la ley del 21 de enero de 2000)

## BÉLGICA

Loi sur la chasse (28 de febrero de 1882, refundida el 6 de agosto de 1997)

Décret sur la chasse (région flamenca) (24 de julio de 1991)

Arrêté du gouvernement wallon relatif aux permis et licences de chasse (4 de mayo de 1995)

Arrêté du gouvernement wallon fixant les conditions et la procédure d'agrément des conseils cynégétiques (30 de mayo de 1996)

Décret concernant la conservation de la nature et le milieu naturel (région flamenca) (21 de octubre de 1997)

## BENIN

Loi portant réglementation de la protection de la nature et de l'exercice de la chasse (ley n° 87-014, 21 de septiembre de 1987)

Loi portant conditions d'exercice de la chasse et du tourisme de vision (ley n° 93-111, 3 de agosto de 1993)

## BOTSWANA

Wildlife Conservation and National Parks Act (ley n° 28 de 1992, en su forma enmendada por las leyes n°60 de 1992 y n° 16 de 1993)

## BULGARIA

Ley de áreas protegidas (30 de octubre de 1998)

## BURKINA FASO

Loi portant code forestier (ley n° 006/97/ADP, 31 de enero de 1997)

## CAMERÚN

Loi portant régime des forêts, de la faune et de la pêche (ley n° 94/01, 20 de enero de 1994)

Décret fixant les modalités d'application du régime de la faune (decreto n° 95/466/PM, 20 de julio de 1995)

## CHILE

Ley que sustituye el texto de la ley n° 4601, sobre caza, y el artículo 609 del código civil (ley n° 19473, 4 de septiembre de 1996)

## CHINA

Ley sobre la protección de la fauna terrestre (8 de noviembre de 1988)

Reglamento de aplicación de la ley sobre la protección de la fauna terrestre (12 de febrero de 1992)

Reglamentos sobre reservas naturales (9 de octubre de 1994)

## COLOMBIA

Normas para el manejo sostenible de especies de fauna silvestre y acuática (ley n° 611, 17 de agosto de 2000)

## COSTA RICA

Ley de biodiversidad (ley n° 7788, 23 de abril de 1998)

Ley de conservación de la vida silvestre (ley n° 7317, 30 de octubre de 1992)

## DINAMARCA

Ley de protección de la naturaleza (n° 9, 3 de enero de 1992, en su forma refundida hasta el 23 de febrero de 2000)

Ley de ordenación de la caza y la fauna (n° 114, 28 de enero de 1997)

## ESPAÑA

Ley de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestre y Ley por la que se modifica la ley de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestre (ley n° 4, 27 de marzo de 1989 y ley n° 41, 5 de noviembre de 1997)

## FILIPINAS

Ley nacional sobre el sistema integrado de áreas protegidas (ley n° 75, 1 de junio de 1992)

## FINLANDIA

Ley sobre la protección de la naturaleza (ley n° 615, 28 de julio de 1993)

Ley sobre la caza (ley n° 1096, 20 de diciembre de 1996)

## FRANCIA

Code de l'environnement, arts. L429-1 a L429-40 (caza)

Code rural, arts. R221-R229 (caza)

Code rural, arts. L211 a L215 y R211 a R215 (protección de la fauna y la flora)

Loi sur la protection et mise en valeur des paysages (n° 93-24, 8 de enero de 1993)

## GUINEA

Loi adoptant et promulguant le code de protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse (ley L/97/038/AN, 9 de diciembre de 1997)

## ITALIA

Ley de protección de los animales silvestres de sangre caliente y la caza (ley n° 157, 11 de febrero de 1992)

Ley de bases sobre las áreas protegidas (ley n° 394, 6 de diciembre de 1991, en su forma enmendada hasta la ley n° 426, 9 de diciembre de 1998)

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros sobre la aplicación de las disposiciones relativas a las excepciones de conformidad con el artículo 9 de la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres (27 de septiembre de 1997)

Decreto legislativo relativo a la transferencia de las funciones administrativas del Estado a las regiones y autoridades locales (decreto n° 112, 31 de marzo de 1998)

Ley regional (Tuscania) sobre la conservación de hábitats naturales y seminaturales y de la flora y la fauna silvestres (ley n° 56, 6 de abril de 2000)

## KENYA

Wildlife (Conservation and Management) Act de 1976, en su forma enmendada en 1989 (ley n° 1, 10 de febrero de 1976 y ley n° 16, 6 de diciembre de 1989)

## LITUANIA

Ley sobre la fauna (ley n° VIII-498, 6 de noviembre de 1997)

## MALAWI

National Parks and Wildlife Act (ley n° 11, 15 de abril de 1992)

## MALÍ

Loi fixant les conditions de gestion de la faune sauvage et de son habitat (ley n° 95-031, 20 de marzo de 1995)

Décret déterminant les modalités et conditions d'exercice des droits conférés par les titres de chasse (decreto n° 97-052/P-RM, 31 de enero de 1997)

## MAURITANIA

Loi abrogeant et remplaçant la loi n° 75-003 du 15 janvier 1975 portant code de la chasse et de la protection de la nature (ley n° 97-006, 20 de enero de 1997)

## MÉXICO

Ley general de vida silvestre (20 de abril de 2000)

## PAÍSES BAJOS

Ley de flora y fauna (25 de mayo de 1998)

## PERÚ

Ley de áreas naturales protegidas (ley n° 26834, 30 de junio de 1997)

## PORTUGAL

Ley de bases sobre la caza (ley n° 173/99, 21 de septiembre de 1999)

Decreto-ley de aplicación la ley de bases sobre la caza (n° 227-B/2000, 15 de septiembre de 2000)

Ley de bases sobre el medio ambiente (ley n° 11/87, 7 de abril de 1987)



## RUMANIA

Ley sobre la caza y la protección de la caza mayor (ley n° 103, 23 de septiembre de 1996)

Ley sobre la protección del medio ambiente (ley n° 157, 29 de diciembre de 1995)

## SUIZA

Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (16 de enero de 1991, con enmiendas hasta el 1° de abril de 1996)

## TAYIKISTÁN

Ley sobre la protección y utilización del mundo animal (ley n° 989, 20 de julio de 1994)

## UGANDA

Uganda Wildlife Statute (ley n° 14, 14 de mayo de 1996)

## URUGUAY

Decreto que mantiene la prohibición de la caza, tenencia, transporte, comercialización e industrialización de especies zoológicas silvestres y sus productos (decreto 164/996, 2 de mayo de 1996)

Decreto que autoriza la caza deportiva y el transporte por el cazador habilitado de ejemplares que se determinan (decreto 165/996, 2 de mayo de 1996).

## **10.- MARCO LEGAL DE LA PROTECCION DE ESPECIES EN COLOMBIA.**

En Colombia, con anterioridad a la promulgación del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, un considerable número de normas fueron emitidas para ir limitando paulatinamente la cacería comercial de las especies de fauna silvestre cuyas poblaciones iban entrando en condiciones de vulnerabilidad o peligro de extinción.

Con la expedición del Código de Recursos Naturales Renovables (Decreto Ley 2811 de 1974), se provee de manera general el marco para la administración, protección, aprovechamiento y comercio de la fauna silvestre. En un sentido amplio, esta norma establece, además, una protección adicional del recurso al definir el Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales, entre cuyas finalidades se cuenta el mantenimiento de la diversidad biológica y estabilidad ecológica mediante un régimen especial de manejo. La reglamentación del anterior Decreto-Ley corresponde, en materia de fauna silvestre, al Decreto 1608 de 1978, en el cual se exceptúan a las especies totalmente acuáticas. Para estas últimas y particularmente en lo concerniente a recursos pesqueros, el gobierno colombiano expidió el Estatuto General de Pesca (Ley 13 de 1990), reglamentado por el Decreto 2256 de 1991, normas por medio de las cuales se regula el manejo integral y la explotación racional de los recursos pesqueros con el fin de asegurar su aprovechamiento sostenido.

Adicionalmente, se han venido dictando nuevas leyes en esta materia, entre las cuales cabe destacar la Ley 17 de 1981, por la cual se aprueba la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), y la Ley 84 de 1989, por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales.

Con la consagración de los Derechos Colectivos y del Ambiente en la Constitución de 1991 (Art. 80) y del Desarrollo Sostenible en la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro, en junio de 1992, se dió impulso a la expedición de la Ley 99 de 1993, mediante la cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente y se organizó el Sistema Nacional Ambiental (SINA).

El Ministerio del Medio Ambiente como ente rector de la gestión del medio ambiente y los recursos naturales renovables, tiene dentro de sus funciones la regulación de las condiciones generales y fijación de las normas para el uso, aprovechamiento, manejo, conservación y restitución de los recursos naturales renovables y del ambiente, y en cuanto a la fijación de los cupos anuales, áreas, especies de fauna y flora silvestre y de recursos ícticos susceptibles de aprovechamiento. Anexo 2. Inversión directa para la fauna silvestre definida en la Ley de Presupuesto General de la Nación (1997-1998)

## **11.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.**

En las recientes leyes de muchos países una de las características más destacadas es la dotación de una base jurídica para la planificación de la ordenación de la fauna. La mayoría de las leyes prevé la formulación de varios tipos de planes de ordenación relacionados con la fauna: desde planes de ordenación de la fauna generales e incluso planes bioregionales de ordenación y planes de ordenación de los recursos naturales, hasta planes de recuperación» y planes de reducción de las amenazas. Las disposiciones relativas a la planificación de la ordenación pueden comprender requisitos para que la administración reúna datos o para que la población interesada los suministre, la publicación de los planes en forma provisional con miras a obtener comentarios de las partes interesadas y la descripción de los contenidos mínimos de los planes. Casi siempre las medidas de ordenación estipuladas por la ley o que deben incorporarse en los planes están sujetas a principios de sostenibilidad.

Estas disposiciones evidencian el hecho de que cada vez más la ley orienta los procesos de ordenación y sus objetivos básicos por lo que se refiere a sus medidas fundamentales, en lugar de dejarlos a merced de las iniciativas de las diversas administraciones. Los aspectos fundamentales de este enfoque son la importancia creciente atribuida a la recopilación de datos científicos para la ordenación y la incorporación del principio de desarrollo sostenible en la legislación nacional.

La tendencia emergente refleja seguramente una mejora general de las bases jurídicas de la ordenación de la fauna. Otros elementos que suelen incorporarse en las leyes recientes, y que contribuyen a esa mejora, son las disposiciones

sobre la protección de la biodiversidad y la evaluación y mitigación de los procesos potencialmente dañinos para la fauna.

Muchas leyes se podrían mejorar aún más vinculando claramente la adopción de las medidas de ordenación con los procesos de planificación y, en particular, con los resultados de los estudios. Sin embargo, no todas las leyes incluyen en una progresión lógica los pasos básicos para una planificación adecuada de la ordenación, por consiguiente su enfoque sigue siendo fragmentario. Otra deficiencia es la tendencia a concentrarse en las especies y zonas más importantes, con el riesgo de perder elementos básicos de la biodiversidad (aunque, quizá, menos espectaculares).

Con respecto a la propiedad de la fauna y los derechos de caza, en general la legislación es el resultado de tradiciones establecidas desde hace tiempo, combinadas con los progresos logrados a través de las presiones de los grupos de interés, las decisiones judiciales y las iniciativas internacionales. Algunos de esos progresos que se están llevando a cabo en varios países van en la misma dirección. Por ejemplo, aparentemente existe una tendencia a extender las prerrogativas de los terratenientes privados reduciendo las limitaciones sobre la fauna que se encuentra en su tierra. Esto está sucediendo incluso en los países donde tradicionalmente se han limitado los derechos de los terratenientes al permitir el libre acceso a la tierra a los cazadores, supuestamente para proteger la fauna confiándosela al Estado, pero más a menudo simplemente para favorecer los intereses de la caza. No obstante, aún existen marcadas diferencias en los enfoques de los sistemas jurídicos relativos a la propiedad de la fauna, los derechos de caza, la indemnización de los daños causados por los animales silvestres y las obligaciones de los terratenientes en materia de ordenación. A este respecto, aparentemente no existe una tendencia a la armonización. Esto, de por sí, no impide una protección y ordenación adecuadas de la fauna, dado que es

posible tomar medidas apropiadas en el ámbito de distintas situaciones de tenencia, adaptando los enfoques a las características y tradiciones locales.

A veces las disposiciones sobre la fauna y las áreas protegidas incorporan aspectos innovadores en la legislación reciente, como las que se proponen intensificar los valores locales significativos en la ordenación de la fauna y las áreas protegidas, incluyendo aspectos naturales, históricos, antropológicos y culturales. Un ejemplo conexo es la transferencia de los poderes de decisión (incluidos los poderes de adoptar las normas aplicables) al nivel local y, en particular, a las autoridades encargadas de la ordenación de las áreas protegidas. Sin embargo, estas disposiciones son poco frecuentes y no pueden considerarse una señal de una evolución general en esa dirección.

En cuanto a la función de la población en la ordenación de la fauna, se está reconociendo cada vez más su importancia y utilidad. Los requisitos jurídicos para las varias formas de participación pública son bastante comunes.

Aún así, el desafío básico de lograr un equilibrio entre los intereses de la población, por un lado, y los de la fauna y las áreas protegidas, por el otro, continúa requiriendo esfuerzos para identificar soluciones innovadoras en la práctica y en las disposiciones institucionales y jurídicas. Actualmente sólo unas cuantas leyes se ocupan de los problemas relativos a los usos alternativos de la tierra y de la integración de la ordenación de la fauna con las otras actividades realizadas en las zonas rurales. La compensación por los daños causados por los animales salvajes raramente resulta ser una solución satisfactoria en aquellos casos en que las presiones para utilizar los recursos de la fauna han llevado a la invasión y a actividades ilegales.

Una contribución para solucionar los conflictos relacionados con la fauna puede llegar de las iniciativas que ofrecen beneficios prácticos a la población, ya sea emprendidas privadamente o con arreglo a acuerdos de colaboración con la administración, como la ordenación de ciertas zonas para la repoblación o la caza, la cría y la reproducción de animales salvajes. La legislación reciente contempla algunos de esos procedimientos, pero hace poco para fomentarlos, limitándose a veces a establecer sólo las restricciones aplicables. No obstante, es posible que dichos procedimientos representen importantes oportunidades para el desarrollo, pues pueden arrojar beneficios económicos y potenciar el papel de las comunidades locales, también con vistas a que la fauna aporte su parte.

**12.-ANEXO**  
**JURISPRUDENCIA SOBRE LA PROTECCIÓN DE ESPECIES.**

LEY 165 DE 1994

(Noviembre 9)

Diario Oficial No. 41.589, de 9 de noviembre de 1994

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad Biológica",  
hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992.

**NOTAS DE VIGENCIA:**

2. El Convenio aprobado por esta Ley fue promulgado por el Decreto 0205 de 1996, publicado en el Diario Oficial No. 42.704 de 30 de enero de 1996.

1. Ley declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia No. C-519-94 de 21 de noviembre de 1994, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

**EL CONGRESO DE COLOMBIA,**

Visto el texto del "Convenio sobre la Diversidad Biológica", hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992.

Convenio sobre la Diversidad Biológica  
Naciones Unidas 1992

Preámbulo



Las Partes Contratantes,

CONSCIENTES del valor intrínseco de la diversidad biológica y de los valores ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos de la diversidad biológica y sus componentes,

Conscientes así mismo de la importancia de la diversidad biológica para la evolución y para el mantenimiento de los sistemas necesarios para la vida de la biosfera,

AFIRMANDO que la conservación de la diversidad biológica es interés común de toda la humanidad,

REAFIRMANDO que los Estados tienen derechos soberanos sobre sus propios recursos biológicos,

REAFIRMANDO ASÍ MISMO que los Estados son responsables de la conservación de su diversidad biológica y de la utilización sostenible de sus recursos biológicos,

PREOCUPADAS por la considerable reducción de la diversidad biológica como consecuencia de determinadas actividades humanas,

CONSCIENTES de la general falta de información y conocimientos sobre la diversidad biológica y de la urgente necesidad de desarrollar capacidades científicas, técnicas e institucionales para lograr un entendimiento básico que permita planificar y aplicar las medidas adecuadas,

OBSERVANDO que es vital prever, prevenir y atacar en su fuente las causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica,

OBSERVANDO TAMBIÉN que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza,

OBSERVANDO ASÍ MISMO que la exigencia fundamental para la conservación de la diversidad biológica es la conservación in situ de los ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento y la recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales,

OBSERVANDO IGUALMENTE que la adopción de medidas ex situ, preferentemente en el país de origen, también desempeña una función importante,

RECONOCIENDO la estrecha y tradicional dependencia de muchas comunidades locales y poblaciones indígenas que tienen sistemas de vida tradicionales basados en los recursos biológicos, y la conveniencia de compartir equitativamente los beneficios que se derivan de la utilización de los conocimientos tradicionales, las innovaciones y las prácticas pertinentes para la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes.

RECONOCIENDO ASÍ MISMO la función decisiva que desempeña la mujer en la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y afirmando la necesidad de la plena participación de la mujer en todos los niveles de la formulación y ejecución de políticas encaminadas a la conservación de la diversidad biológica,

DESTACANDO la importancia y la necesidad de promover la cooperación internacional, regional y mundial entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales y el sector no gubernamental para la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes,

RECONOCIENDO que cabe esperar que el suministro de recursos financieros suficientes, nuevos y adicionales y el debido acceso a las tecnologías pertinentes puedan modificar considerablemente la capacidad mundial de hacer frente a la pérdida de la diversidad biológica,

RECONOCIENDO TAMBIÉN que es necesario adoptar disposiciones especiales para atender a las necesidades de los países en desarrollo, incluidos el suministro de recursos financieros nuevos y adicionales y el debido acceso a las tecnologías pertinentes,

TOMANDO NOTA a este respecto de las condiciones especiales de los países menos adelantados y de los pequeños Estados insulares,

RECONOCIENDO que se precisan inversiones considerables para conservar la diversidad biológica y que cabe esperar que esas inversiones entrañen una amplia gama de beneficios ecológicos, económicos y sociales,

RECONOCIENDO que el desarrollo económico y social y la erradicación de la pobreza son prioridades básicas y fundamentales de los países en desarrollo,

CONSCIENTES de que la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica tienen importancia crítica para satisfacer las necesidades alimentarias, de salud y de otra naturaleza de la población mundial en crecimiento, para lo que

son esenciales el acceso a los recursos genéticos y a las tecnologías, y la participación en esos recursos y tecnologías,

TOMANDO NOTA de que, en definitiva, la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica fortalecerán las relaciones de amistad entre los Estados y contribuirán a la paz de la humanidad,

DESEANDO fortalecer y complementar los arreglos internacionales existentes para la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes, y

RESUELTAS a conservar y utilizar de manera sostenible la diversidad biológica en beneficio de las generaciones actuales y futuras,

HAN ACORDADO lo siguiente:

ARTÍCULO 1o. OBJETIVOS. Los objetivos del presente Convenio, que se han de perseguir de conformidad con sus disposiciones pertinentes, son la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada.

ARTÍCULO 2o. TÉRMINOS UTILIZADOS. A los efectos del presente Convenio:

Por "área protegida" se entiende un área definida geográficamente que haya sido designada o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación.

Por "biotecnología" se entiende toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos.

Por "condiciones in situ" se entienden las condiciones en que existen recursos genéticos dentro de ecosistemas y hábitats naturales y, en el caso de las especies domesticadas o cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas.

Por "conservación ex situ" se entiende la conservación de componentes de la diversidad biológica fuera de sus hábitats naturales.

Por "conservación in situ" se entiende la conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales y el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y, en el caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas.

Por "diversidad biológica" se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.

Por "ecosistema" se entiende un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional.

Por "especie domesticada o cultivada" se entiende una especie en cuyo proceso de evolución han influido los seres humanos para satisfacer sus propias necesidades.

Por "hábitat" se entiende el lugar o tipo de ambiente en el que existe naturalmente un organismo o una población.

Por "material genético" se entiende todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la herencia.

Por "organización de integración económica regional" se entiende una organización constituida por Estados soberanos de una región determinada a la que sus Estados miembros han transferido competencias en los asuntos regidos por el presente Convenio y que ha sido debidamente facultada, de conformidad con sus procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar o aprobar el Convenio o adherirse a él.

Por "país de origen de recursos genéticos" se entiende el país que posee esos recursos genéticos en condiciones in situ.

Por "país que aporta recursos genéticos" se entiende el país que suministra recursos genéticos obtenidos de fuentes in situ, incluidas las poblaciones de especies silvestres y domesticadas, o de fuentes ex situ, que pueden tener o no su origen en ese país.

Por "recursos biológicos" se entienden los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las poblaciones, o cualquier otro tipo del componente biótico de los ecosistemas de valor o utilidad real o potencial para la humanidad.

Por "recursos genéticos" se entiende el material genético de valor real o potencial.

El término "tecnología" incluye la biotecnología.

Por "utilización sostenible" se entiende la utilización de componentes de la diversidad biológica de un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad biológica, con lo cual se mantienen las posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y futuras.

ARTÍCULO 3o. PRINCIPIO. De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental y la obligación de asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional.

ARTÍCULO 4o. ÁMBITO JURISDICCIONAL. Con sujeción a los derechos de otros Estados, y a menos que se establezca expresamente otra cosa en el presente Convenio, las disposiciones del Convenio se aplicarán, en relación con cada Parte Contratante:

a) En el caso de componentes de la diversidad biológica, en las zonas situadas dentro de los límites de su jurisdicción nacional; y

b) En el caso de procesos y actividades realizados bajo su jurisdicción o control, y con independencia de dónde se manifiesten sus efectos, dentro o fuera de las zonas sujetas a su jurisdicción nacional.

ARTÍCULO 5o. COOPERACIÓN. Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda, cooperará con otras Partes Contratantes, directamente o, cuando proceda, a través de las organizaciones internacionales competentes, en lo que respecta a las zonas no sujetas a jurisdicción nacional, y en otras cuestiones de interés común para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica.

ARTÍCULO 6o. MEDIDAS GENERALES A LOS EFECTOS DE LA CONSERVACIÓN Y LA UTILIZACIÓN SOSTENIBLE. Cada Parte Contratante, con arreglo a sus condiciones y capacidades particulares:

a) Elaborará estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica o adaptará para ese fin las estrategias, planes o programas existentes, que habrán de reflejar, entre otras cosas, las medidas establecidas en el presente Convenio que sean pertinentes para la Parte Contratante interesada; y

b) Integrará, en la medida de lo posible y según proceda, la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica en los planes, programas y políticas sectoriales o intersectoriales.

ARTÍCULO 7o. IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO. Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda, en especial para los fines de los artículos 8 a 10:



- a) Identificará los componentes de la diversidad biológica que sean importantes para su conservación y utilización sostenible, teniendo en consideración la lista indicativa de categorías que figura en el anexo I;
- b) Procederá, mediante muestreo y otras técnicas, al seguimiento de los componentes de la diversidad biológica identificados de conformidad con el apartado a), prestando especial atención a los que requieran la adopción de medidas urgentes de conservación y a los que ofrezcan el mayor potencial para la utilización sostenible;
- c) Identificará los procesos y categorías de actividades que tengan, o sea probable que tengan, efectos perjudiciales importantes en la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y procederá, mediante muestreo y otras técnicas, al seguimiento de esos efectos; y
- d) Mantendrá y organizará, mediante cualquier mecanismo, los datos derivados de las actividades de identificación y seguimiento de conformidad con los apartados a), b) y c) de este artículo.

**ARTÍCULO 8o. CONSERVACIÓN IN SITU.** Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:

- a) Establecerá un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica;
- b) Cuando sea necesario, elaborará directrices para la selección, el establecimiento y la ordenación de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica;

- c) Reglamentará o administrará los recursos biológicos importantes para la conservación de la diversidad biológica, ya sea dentro o fuera de las áreas protegidas, para garantizar su conservación y utilización sostenible;
- d) Promoverá la protección de ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales;
- e) Promoverá un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en zonas adyacentes a áreas protegidas, con miras a aumentar la protección de esas zonas;
- f) Rehabilitará y restaurará ecosistemas degradados y promoverá la recuperación de especies amenazadas, entre otras cosas mediante la elaboración y la aplicación de planes u otras estrategias de ordenación;
- g) Establecerá o mantendrá medios para regular, administrar o controlar los riesgos derivados de la utilización y la liberación de organismos vivos modificados como resultado de la biotecnología que es probable tengan repercusiones ambientales adversas que puedan afectar a la conservación y a la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana;
- h) Impedirá que se introduzcan, controlará o erradicará las especies exóticas que amenacen a ecosistemas, hábitats o especies;
- i) Procurará establecer las condiciones necesarias para armonizar las utilidades actuales con la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes;

j) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente;

k) Establecerá o mantendrá la legislación necesaria y/u otras disposiciones de reglamentación para la protección de especies y poblaciones amenazadas;

l) Cuando se haya determinado, de conformidad con el artículo 7o., un efecto adverso importante para la diversidad biológica, reglamentará u ordenará los procesos y categorías de actividades pertinentes; y

m) Cooperará en el suministro de apoyo financiero y de otra naturaleza para la conservación in situ a que se refieren los apartados a) a 1) de este artículo, particularmente a países en desarrollo.

ARTÍCULO 9o. CONSERVACIÓN EX SITU. Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda, y principalmente a fin de complementar las medidas in situ:

a) Adoptará medidas para la conservación ex situ de componentes de la diversidad biológica, preferiblemente en el país de origen de esos componentes;

b) Establecerá y mantendrá instalaciones para la conservación ex situ y la investigación de plantas, animales y microorganismos, preferiblemente en el país de origen de recursos genéticos;

c) Adoptará medidas destinadas a la recuperación y rehabilitación de las especies amenazadas y a la reintroducción de éstas en sus hábitats naturales en condiciones apropiadas;

d) Reglamentará y gestionará la recolección de recursos biológicos de los hábitats naturales a efectos de conservación ex situ, con objeto de no amenazar los ecosistemas ni las poblaciones in situ de las especies, salvo cuando se requieran medidas ex situ temporales especiales conforme al apartado c) de este artículo; y

e) Cooperará en el suministro de apoyo financiero y de otra naturaleza para la conservación ex situ a que se refieren los Apartados a) a d) de este artículo y en el establecimiento y mantenimiento de instalaciones para la conservación ex situ en países en desarrollo.

ARTÍCULO 10. UTILIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS COMPONENTES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA. Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:

a) Integrará el examen de la conservación y la utilización sostenible de los recursos biológicos en los procesos nacionales de adopción de decisiones;

b) Adoptará medidas relativas a la utilización de los recursos biológicos para evitar o reducir al mínimo los efectos adversos para la diversidad biológica;

c) Protegerá y alentará la utilización consuetudinaria de los recursos biológicos, de conformidad con las prácticas culturales tradicionales que sean compatibles con las exigencias de la conservación o de la utilización sostenible;

d) Prestará ayuda a las poblaciones locales para preparar y aplicar medidas correctivas en las zonas degradadas donde la diversidad biológica se ha reducido;  
y

e) Fomentará la cooperación entre sus autoridades gubernamentales y su sector privado en la elaboración de métodos para la utilización sostenible de los recursos biológicos.

ARTÍCULO 11. INCENTIVOS. Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda, adoptará medidas económica y socialmente idóneas que actúen como incentivos para la conservación y la utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica.

ARTÍCULO 12. INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN. Las Partes Contratantes, teniendo en cuenta las necesidades especiales de los países en desarrollo:

a) Establecerán y mantendrán programas de educación y capacitación científica y técnica en medidas de identificación, conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y sus componentes y prestarán apoyo para tal fin centrado en las necesidades específicas de los países en desarrollo;

b) Promoverán y fomentarán la investigación que contribuya a la conservación y a la utilización sostenible de la diversidad biológica, particularmente en los países en desarrollo, entre otras cosas, de conformidad con las decisiones adoptadas por la

Conferencia de las Partes a raíz de las recomendaciones del órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico; y

c) De conformidad con las disposiciones de los artículos 16, 18 y 20, promoverán la utilización de los adelantos científicos en materia de investigaciones sobre diversidad biológica para la elaboración de métodos de conservación y utilización sostenible de los recursos biológicos, y cooperarán en esa esfera.

#### ARTÍCULO 13. EDUCACIÓN Y CONCIENCIA PÚBLICA. Las Partes Contratantes:

a) Promoverán y fomentarán la comprensión de la importancia de la conservación de la diversidad biológica y de las medidas necesarias a esos efectos, así como su propagación a través de los medios de información, y la inclusión de esos temas en los programas de educación; y

b) Cooperarán, según proceda, con otros Estados y organizaciones internacionales en la elaboración de programas de educación y sensibilización del público en lo que respecta a la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica.

#### ARTÍCULO 14. EVALUACIÓN DEL IMPACTO Y REDUCCIÓN AL MÍNIMO DEL IMPACTO ADVERSO.

1. Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:

a) Establecerá procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto ambiental de sus proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica con miras a evitar o reducir al

mínimo esos efectos y, cuando proceda, permitirá la participación del público en esos procedimientos;

b) Establecerá arreglos apropiados para asegurarse de que se tengan debidamente en cuenta las consecuencias ambientales de sus programas y políticas que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica;

c) Promoverá, con carácter recíproco, la notificación, el intercambio de información y las consultas acerca de las actividades bajo su jurisdicción o control que previsiblemente tendrían efectos adversos importantes para la diversidad biológica de otros Estados o de zonas no sujetas a jurisdicción nacional, alentando la concertación de acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales, según proceda;

d) Notificará inmediatamente, en caso de que se originen bajo su jurisdicción o control peligros inminentes o graves para la diversidad biológica o daños a esa diversidad en la zona bajo la jurisdicción de otros Estados o en zonas más allá de los límites de la jurisdicción nacional, a los Estados que puedan verse afectados por esos peligros o esos daños, además de iniciar medidas para prevenir o reducir al mínimo esos peligros o esos daños; y

e) Promoverá arreglos nacionales sobre medidas de emergencia relacionadas con actividades o acontecimientos naturales o de otra índole que entrañen graves e inminentes peligros para la diversidad biológica, apoyará la cooperación internacional para complementar esas medidas nacionales y, cuando proceda y con el acuerdo de los Estados o las organizaciones regionales de integración económica interesados, establecerá planes conjuntos para situaciones imprevistas.

2. La Conferencia de las Partes examinará, sobre la base de estudios que se llevarán a cabo, la cuestión de la responsabilidad y reparación, incluso el restablecimiento y la indemnización por daños causados a la diversidad biológica, salvo cuando esa responsabilidad sea una cuestión puramente interna.

## ARTÍCULO 15. ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS.

1. En reconocimiento de los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos naturales, la facultad de regular el acceso a los recursos genéticos incumbe a los gobiernos nacionales y está sometida a la legislación nacional.

2. Cada Parte Contratante procurará crear condiciones para facilitar a otras Partes Contratantes el acceso a los recursos genéticos para utilizaciones ambientalmente adecuadas, y no imponer restricciones contrarias a los objetivos del presente Convenio.

3. A los efectos del presente Convenio, los recursos genéticos suministrados por una Parte Contratante a los que se refieren este artículo y los artículos 16 y 19 son únicamente los suministrados por Partes Contratantes que son países de origen de esos recursos o por las Partes que hayan adquirido los recursos genéticos de conformidad con el presente Convenio.

4. Cuando se conceda acceso, éste será en condiciones mutuamente convenidas y estará sometido a lo dispuesto en el presente artículo.

5. El acceso a los recursos genéticos estará sometido al consentimiento fundamentado previo de la Parte Contratante que proporciona los recursos, a menos que esa Parte decida otra cosa.



6. Cada Parte Contratante procurará promover y realizar investigaciones científicas basadas en los recursos genéticos proporcionados por otras Partes Contratantes con la plena participación de esas Partes Contratantes, y de ser posible en ellas.

7. Cada Parte Contratante tomará medidas legislativas, administrativas o de política, según proceda, de conformidad con los artículos 16 y 19 y, cuando sea necesario, por conducto del mecanismo financiero previsto en los artículos 20 y 21, para compartir en forma justa y equitativa los resultados de las actividades de investigación y desarrollo y los beneficios derivados de la utilización comercial y de otra índole de los recursos genéticos con la Parte Contratante que aporta esos recursos. Esa participación se llevará a cabo en condiciones mutuamente acordadas.

## ARTÍCULO 16. ACCESO A LA TECNOLOGÍA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA.

1. Cada Parte Contratante, reconociendo que la tecnología incluye la biotecnología, y que tanto el acceso a la tecnología como su transferencia entre Partes Contratantes son elementos esenciales para el logro de los objetivos del presente Convenio, se compromete, con sujeción a las disposiciones del presente artículo, a asegurar y/o facilitar a otras Partes Contratantes el acceso a tecnologías pertinentes para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica o que utilicen recursos genéticos y no causen daños significativos al medio ambiente, así como la transferencia de esas tecnologías.

2. El acceso de los países en desarrollo a la tecnología y la transferencia de tecnología a esos países, a que se refiere el párrafo 1, se asegurará y/o facilitará en condiciones justas y en los términos más favorables, incluidas las condiciones

preferenciales y concesionarias que se establezcan de común acuerdo, y, cuando sea necesario, de conformidad con el mecanismo financiero establecido en los artículos 20 y 21. En el caso de tecnología sujeta a patentes y otros derechos de propiedad intelectual, el acceso a esa tecnología y su transferencia se asegurarán en condiciones que tengan en cuenta la protección adecuada y eficaz de los derechos de propiedad intelectual y sean compatibles con ella. La aplicación de este párrafo se ajustará a los párrafos 3, 4 y 5 del presente artículo.

3. Cada Parte Contratante tomará medidas legislativas, administrativas o de política, según proceda, con objeto de que se asegure a las Partes Contratantes, en particular las que son países en desarrollo, que aportan recursos genéticos, el acceso a la tecnología que utilice ese material y la transferencia de esa tecnología, en condiciones mutuamente acordadas, incluida la tecnología protegida por patentes y otros derechos de propiedad intelectual, cuando sea necesario mediante las disposiciones de los artículos 20 y 21, y con arreglo al derecho internacional y en armonía con los párrafos 4 y 5 del presente artículo.

4. Cada Parte Contratante tomará medidas legislativas, administrativas o de política, según proceda, con objeto de que el sector privado facilite el acceso a la tecnología a que se refiere el párrafo 1, su desarrollo conjunto y su transferencia en beneficio de las instituciones gubernamentales y el sector privado de los países en desarrollo, y a ese respecto acatará las obligaciones establecidas en los párrafos 1, 2 y 3 del presente artículo.

5. Las Partes Contratantes, reconociendo que las patentes y otros derechos de propiedad intelectual pueden influir en la aplicación del presente Convenio, cooperarán a este respecto de conformidad con la legislación nacional y el derecho internacional para velar por que esos derechos apoyen y no se opongan a los objetivos del presente Convenio.

## ARTÍCULO 17. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN.

1. Las Partes Contratantes facilitarán el intercambio de información de todas las fuentes públicamente disponibles pertinente para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo en cuenta las necesidades especiales de los países en desarrollo.

2. Ese intercambio de información incluirá el intercambio de los resultados de las investigaciones técnicas, científicas y socioeconómicas, así como información sobre programas de capacitación y de estudio, conocimientos especializados, conocimientos autóctonos y tradicionales, por sí solos y en combinación con las tecnologías mencionadas en el párrafo 1o. del artículo 16. También incluirá, cuando sea viable, la repatriación de la información.

## ARTÍCULO 18. COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA.

1. Las Partes Contratantes fomentarán la cooperación científica y técnica internacional en la esfera de la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, cuando sea necesario por conducto de las instituciones nacionales e internacionales competentes.

2. Cada Parte Contratante promoverá la cooperación científica y técnica con otras Partes Contratantes, en particular los países en desarrollo, en la aplicación del presente Convenio, mediante, entre otras cosas, el desarrollo y la aplicación de políticas nacionales. Al fomentar esa cooperación debe prestarse especial atención al desarrollo y fortalecimiento de la capacidad nacional, mediante el desarrollo de los recursos humanos y la creación de instituciones.

3. La Conferencia de las Partes, en su primera reunión, determinará la forma de establecer un mecanismo de facilitación para promover y facilitar la cooperación científica y técnica.

4. De conformidad con la legislación y las políticas nacionales, las Partes Contratantes fomentarán y desarrollarán métodos de cooperación para el desarrollo y utilización de tecnologías, incluidas las tecnologías autóctonas y tradicionales, para la consecución de los objetivos del presente Convenio. Con tal fin, las Partes Contratantes promoverán también la cooperación para la capacitación de personal y el intercambio de expertos.

5. Las Partes Contratantes, si así lo convienen de mutuo acuerdo, fomentarán el establecimiento de programas conjuntos de investigación y de empresas conjuntas para el desarrollo de tecnologías pertinentes para los objetivos del presente Convenio.

#### ARTÍCULO 19. GESTIÓN DE LA BIOTECNOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN DE SUS BENEFICIOS.

1. Cada Parte Contratante adoptará medidas legislativas, administrativas o de política, según proceda, para asegurar la participación efectiva en las actividades de investigación sobre biotecnología de las Partes Contratantes, en particular los países en desarrollo que aportan recursos genéticos para tales investigaciones, y, cuando sea factible, en esas Partes Contratantes.

2. Cada Parte Contratante adoptará todas las medidas practicables para promover e impulsar en condiciones justas y equitativas el acceso prioritario de las Partes Contratantes, en particular los países en desarrollo, a los resultados y beneficios derivados de las biotecnologías basadas en recursos genéticos aportados por

esas Partes Contratantes. Dicho acceso se concederá conforme a condiciones determinadas por mutuo acuerdo.

3. Las Partes estudiarán la necesidad y las modalidades de un protocolo que establezca procedimientos adecuados, incluido en particular el consentimiento fundamentado previo, en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización de cualesquiera organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica.

4. Cada Parte Contratante proporcionará, directamente o exigiéndoselo a toda persona natural o jurídica bajo su jurisdicción que suministre los organismos a los que se hace referencia en el párrafo 3, toda la información disponible acerca de las reglamentaciones relativas al uso y la seguridad requeridas por esa Parte Contratante para la manipulación de dichos organismos, así como toda información disponible sobre los posibles efectos adversos de los organismos específicos de que se trate, a la Parte Contratante en la que esos organismos hayan de introducirse.

## ARTÍCULO 20. RECURSOS FINANCIEROS.

1. Cada Parte Contratante se compromete a proporcionar, con arreglo a su capacidad, apoyo e incentivos financieros respecto de las actividades que tengan la finalidad de alcanzar los objetivos del presente Convenio, de conformidad con sus planes, prioridades y programas nacionales.

2. Las Partes que son países desarrollados proporcionarán recursos financieros nuevos y adicionales para que las Partes que son países en desarrollo puedan sufragar íntegramente los costos incrementales convenidos que entrañe la

aplicación de medidas en cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del presente Convenio y beneficiarse de las disposiciones del Convenio. Esos costos se determinarán de común acuerdo entre cada Parte que sea país en desarrollo y la estructura institucional contemplada en el artículo 21 de conformidad con la política, la estrategia, las prioridades programáticas, los criterios de elegibilidad y una lista indicativa de costos incrementales establecida por la Conferencia de las Partes. Otras partes, incluidos los países que se encuentran en un proceso de transición hacia una economía de mercado, podrán asumir voluntariamente las obligaciones de las Partes que son países desarrollados. A los efectos del presente artículo, la Conferencia de las Partes establecerá, en su primera reunión, una lista de Partes que son países desarrollados y de otras Partes que asuman voluntariamente las obligaciones de las Partes que son países desarrollados. La Conferencia de las Partes examinará periódicamente la lista y la modificará si es necesario. Se fomentará también la aportación de contribuciones voluntarias por parte de otros países y fuentes. Para el cumplimiento de esos compromisos se tendrán en cuenta la necesidad de conseguir que la corriente de fondos sea suficiente, previsible y oportuna y la importancia de distribuir los costos entre las Partes contribuyentes incluidas en la lista.

3. Las Partes que son países desarrollados podrán aportar asimismo recursos financieros relacionados con la aplicación del presente Convenio por conducto de canales bilaterales, regionales y multilaterales de otro tipo, y las Partes que son países en desarrollo podrán utilizar dichos recursos.

4. La medida en que las Partes que sean países en desarrollo cumplan efectivamente las obligaciones contraídas en virtud de este Convenio dependerá del cumplimiento efectivo por las Partes que sean países desarrollados de sus obligaciones en virtud de este Convenio relativas a los recursos financieros y a la

transferencia de tecnología, y se tendrá plenamente en cuenta a este respecto que el desarrollo económico y social y la erradicación de la pobreza son las prioridades primordiales y supremas de las Partes que son países en desarrollo.

5. Las Partes tendrán plenamente en cuenta las necesidades concretas y la situación especial de los países menos adelantados en sus medidas relacionadas con la financiación y la transferencia de tecnología.

6. Las Partes Contratantes también tendrán en cuenta las condiciones especiales que son resultado de la dependencia respecto de la diversidad biológica, su distribución y su ubicación, en las Partes que son países en desarrollo, en especial los Estados insulares pequeños.

7. También se tendrá en cuenta la situación especial de los países en desarrollo incluidos los que son más vulnerables desde el punto de vista del medio ambiente, como los que poseen zonas áridas y semiáridas, costeras y montañosas.

## ARTÍCULO 21. MECANISMO FINANCIERO.

1. Se establecerá un mecanismo para el suministro de recursos financieros a los países en desarrollo Partes a los efectos del presente Convenio, con carácter de subvenciones o en condiciones favorables, y cuyos elementos fundamentales se describen en el presente artículo. El mecanismo funcionará bajo la autoridad y orientación de la Conferencia de las Partes a los efectos de este Convenio, ante quien será responsable. Las operaciones del mecanismo se llevarán a cabo por conducto de la estructura institucional que decida la Conferencia de las Partes en su primera reunión. A los efectos del presente Convenio, la Conferencia de las Partes determinará la política, la estrategia, las prioridades programáticas y los criterios para el acceso a esos recursos y su utilización. En las contribuciones se

habrá de tener en cuenta la necesidad de una corriente de fondos previsible, suficiente y oportuna, tal como se indica en el artículo 20 y de conformidad con el volumen de recursos necesarios, que la conferencia de las Partes decidirá periódicamente, así como la importancia de compartir los costos entre las Partes contribuyentes incluidas en la lista mencionada en el párrafo 2 del artículo 20. Los países desarrollados Partes y otros países y fuentes podrán también aportar contribuciones voluntarias. El mecanismo funcionará con un sistema de gobierno democrático y transparente.

2. De conformidad con los objetivos del presente Convenio, la Conferencia de las Partes establecerá en su primera reunión la política, la estrategia y las prioridades programáticas, así como las directrices y los criterios detallados para el acceso a los recursos financieros y su utilización, incluidos el seguimiento y la evaluación periódicos de esa utilización. La Conferencia de las Partes acordará las disposiciones para dar efecto al párrafo 1, tras consulta con la estructura institucional encargada del funcionamiento del mecanismo financiero.

3. La Conferencia de las Partes examinará la eficacia del mecanismo establecido con arreglo a este artículo, comprendidos los criterios y las directrices a que se hace referencia en el párrafo 2 cuando hayan transcurrido al menos dos años de la entrada en vigor del presente Convenio, y periódicamente en adelante. Sobre la base de ese examen adoptará las medidas adecuadas para mejorar la eficacia del mecanismo, si es necesario.

4. Las Partes Contratantes estudiarán la posibilidad de reforzar las instituciones financieras existentes con el fin de facilitar recursos financieros para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica.

**ARTÍCULO 22. RELACIÓN CON OTROS CONVENIOS INTERNACIONALES.**



1. Las disposiciones de este Convenio no afectarán a los derechos y obligaciones de toda Parte Contratante derivados de cualquier acuerdo internacional existente, excepto cuando el ejercicio de esos derechos y el cumplimiento de esas obligaciones puedan causar graves daños a la diversidad biológica o ponerla en peligro.

2. Las Partes Contratantes aplicarán el presente Convenio con respecto al medio marino, de conformidad con los derechos y obligaciones de los Estados con arreglo al derecho del mar.

#### ARTÍCULO 23. CONFERENCIA DE LAS PARTES.

1. Queda establecida una conferencia de las Partes. El Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente convocará la primera reunión de la Conferencia de las Partes a más tardar un año después de la entrada en vigor del presente Convenio. De allí en adelante, las reuniones ordinarias de la Conferencia de las Partes se celebrarán a los intervalos regulares que determine la Conferencia en su primera reunión.

2. Las reuniones extraordinarias de la Conferencia de las Partes se celebrarán cuando la Conferencia lo estime necesario o cuando cualquiera de las Partes lo solicite por escrito, siempre que dentro de los seis meses siguientes de haber recibido de la Secretaría, comunicación de dicha solicitud, un tercio de las Partes, como mínimo, la apoye.

3. La Conferencia de las Partes acordará y adoptará por consenso su reglamento interno y los de cualesquiera órganos subsidiarios que establezca, así como el reglamento financiero que regirá la financiación de la Secretaría. En cada reunión

ordinaria, la Conferencia de las Partes aprobará un presupuesto para el ejercicio financiero que transcurrirá hasta la reunión ordinaria siguiente.

4. La Conferencia de las Partes examinará la aplicación de este Convenio y, con ese fin:

a) Establecerá la forma y los intervalos para transmitir la información que deberá presentarse de conformidad con el artículo 26, y examinará esa información, así como los informes presentados por cualquier órgano subsidiario;

b) Examinará el asesoramiento científico, técnico y tecnológico sobre la diversidad biológica facilitado conforme al artículo 25;

c) Examinará y adoptará, según proceda, protocolos de conformidad con el artículo 28;

d) Examinará y adoptará, según proceda, las enmiendas al presente Convenio y a sus anexos, conforme a los artículos 29 y 30;

e) Examinará las enmiendas a todos los protocolos, así como a todos los anexos de los mismos y, si así se deciden recomendará su adopción a las Partes en el protocolo pertinente;

f) Examinará y adoptará anexos adicionales al presente Convenio, según proceda, de conformidad con el artículo 30;

g) Establecerá los órganos subsidiarios, especialmente de asesoramiento científico y técnico, que se consideren necesarios para la aplicación del presente Convenio;

h) Entrará en contacto, por medio de la Secretaría, con los órganos ejecutivos de los convenios que traten cuestiones reguladas por el presente Convenio, con miras a establecer formas adecuadas de cooperación con ellos; e

i) Examinará y tomará todas las demás medidas necesarias para la consecución de los objetivos del presente Convenio a la luz de la experiencia adquirida durante su aplicación.

5. Las Naciones Unidas, sus organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica, así como todo Estado que no sea Parte en el presente Convenio, podrán estar representados como observadores en las reuniones de la Conferencia de las Partes. Cualquier otro órgano u organismo nacional o internacional, ya sea gubernamental o no gubernamental, con competencia en las esferas relacionadas con la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, que haya informado a la Secretaría de su deseo de estar representado, como observador, en una reunión de la Conferencia de las Partes, podrá ser admitido a participar salvo si un tercio, por lo menos, de las Partes presentes se oponen a ello. La admisión y participación de observadores estarán sujetas al reglamento aprobado por la Conferencia de las Partes.

## ARTÍCULO 24. SECRETARÍA.

1. Queda establecida una Secretaría, con las siguientes funciones:

a) Organizar las reuniones de la Conferencia de las Partes previstas en el artículo 23, y prestar los servicios necesarios;

b) Desempeñar las funciones que se le asignen en los protocolos;

c) Preparar informes acerca de las actividades que desarrolle en desempeño de sus funciones en virtud del presente Convenio, para presentarlos a la Conferencia de las Partes;

d) Asegurar la coordinación necesaria con otros órganos internacionales pertinentes y, en particular, concertar los arreglos administrativos y contractuales que puedan ser necesarios para el desempeño eficaz de sus funciones; y

e) Desempeñar las demás funciones que determine la Conferencia de las Partes.

2. En su primera reunión ordinaria, la Conferencia de las Partes designará la Secretaría escogiéndola entre las organizaciones internacionales competentes que se hayan mostrado dispuestas a desempeñar las funciones de Secretaría establecidas en el presente Convenio.

## ARTÍCULO 25. ÓRGANO SUBSIDIARIO DE ASESORAMIENTO CIENTÍFICO, TÉCNICO Y TECNOLÓGICO.

1. Queda establecido un órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico a fin de proporcionar a la Conferencia de las Partes y, cuando proceda, a sus otros órganos subsidiarios, asesoramiento oportuno sobre la aplicación del presente Convenio. Este órgano estará abierto a la participación de todas las Partes y será multidisciplinario. Estará integrado por representantes de los gobiernos con competencia en el campo de especialización pertinente. Presentará regularmente informes a la Conferencia de las Partes sobre todos los aspectos de su labor.

2. Bajo la autoridad de la Conferencia de las Partes, de conformidad con directrices establecidas por ésta y a petición de la propia Conferencia, este órgano:

a) Proporcionará evaluaciones científicas y técnicas del estado de la diversidad biológica;

b) Preparará evaluaciones científicas y técnicas de los efectos de los tipos de medidas adoptadas de conformidad con las disposiciones del presente Convenio;

c) Identificará las tecnologías y los conocimientos especializados que sean innovadores, eficientes y más avanzados relacionados con la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y prestará asesoramiento sobre las formas de promover el desarrollo y/o la transferencia de esas tecnologías;

d) Prestará asesoramiento sobre los programas científicos y la cooperación internacional en materia de investigación y desarrollo en relación con la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica; y

e) Responderá a las preguntas de carácter científico, técnico, tecnológico y metodológico que le planteen la Conferencia de las Partes y sus órganos subsidiarios.

3. La Conferencia de las Partes podrá ampliar ulteriormente las funciones, el mandato, la organización y el funcionamiento de este órgano.

ARTÍCULO 26. INFORMES. Cada Parte Contratante, con la periodicidad que determine la Conferencia de las Partes, presentará a la Conferencia de las Partes informes sobre las medidas que haya adoptado para la aplicación de las

disposiciones del presente Convenio y sobre la eficacia de esas medidas para el logro de los objetivos del Convenio.

## ARTÍCULO 27. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

1. Si se suscita una controversia entre Partes Contratantes en relación con la interpretación o aplicación del presente Convenio, las Partes interesadas tratarán de resolverla mediante negociación.

2. Si las Partes interesadas no pueden llegar a un acuerdo mediante negociación, podrán solicitar conjuntamente los buenos oficios o la mediación de una tercera Parte.

3. Al ratificar, aceptar, aprobar el presente Convenio, o al adherirse a él, o en cualquier momento posterior, un Estado o una organización de integración económica regional podrá declarar, por comunicación escrita enviada al Depositario, que en el caso de una controversia no resuelta, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 o en el párrafo 2 del presente artículo, acepta uno o los dos medios de solución de controversias que se indican a continuación, reconociendo su carácter obligatorio:

a) Arbitraje de conformidad con el procedimiento establecido en la parte 1 del anexo II;

b) Presentación de la controversia a la Corte Internacional de Justicia.

4. Si en virtud de lo establecido en el párrafo 3 del presente artículo, las Partes en la controversia no han aceptado el mismo procedimiento o ningún procedimiento,

la controversia se someterá a conciliación de conformidad con la parte 2 del anexo II, a menos que las Partes acuerden otra cosa.

5. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán respecto de cualquier protocolo, salvo que en dicho protocolo se indique otra cosa.

#### ARTÍCULO 28. ADOPCIÓN DE PROTOCOLOS.

1. Las Partes Contratantes cooperarán en la formulación y adopción de protocolos del presente Convenio.

2. Los protocolos serán adoptados en una reunión de la Conferencia de las Partes.

3. La Secretaría comunicará a las Partes Contratantes el texto de cualquier protocolo propuesto por lo menos seis meses antes de celebrarse esa reunión.

#### ARTÍCULO 29. ENMIENDAS AL CONVENIO O LOS PROTOCOLOS.

1. Cualquiera de las Partes Contratantes podrá proponer enmiendas al presente Convenio. Cualquiera de las Partes en un protocolo podrá proponer enmiendas a ese protocolo.

2. Las enmiendas al presente Convenio se adoptarán en una reunión de la Conferencia de las Partes. Las enmiendas a cualquier protocolo se aprobarán en una reunión de las Partes en el protocolo de que se trate.

El texto de cualquier enmienda propuesta al presente Convenio o a cualquier protocolo, salvo si en tal protocolo se dispone otra cosa, será comunicado a las Partes en el instrumento de que se trate por la Secretaría, por lo menos seis

meses antes de la reunión en que se proponga su adopción. La Secretaría comunicará también las enmiendas propuestas a los signatarios del presente Convenio para su información.

3. Las Partes Contratantes harán todo lo posible por llegar a un acuerdo por consenso sobre cualquier propuesta de enmienda al presente Convenio o a cualquier protocolo. Una vez agotados todos los esfuerzos por lograr un consenso sin que se haya llegado a un acuerdo, la enmienda se adoptará, como último recurso, por mayoría de dos tercios de las Partes Contratantes en el instrumento de que se trate, presentes y votantes en la reunión, y será presentada a todas las Partes Contratantes por el Depositario para su ratificación, aceptación o aprobación.

4. La ratificación, aceptación o aprobación de las enmiendas serán notificadas al Depositario por escrito. Las enmiendas adoptadas de conformidad con el párrafo 3 de este artículo entrarán en vigor, respecto de las Partes que las hayan aceptado, el nonagésimo día después de la fecha del depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación por dos tercios, como mínimo, de las Partes Contratantes en el presente Convenio o de las Partes en el protocolo de que se trate, salvo si en este último se dispone otra cosa. De allí en adelante, las enmiendas entrarán en vigor respecto de cualquiera otra Parte, el nonagésimo día después de la fecha en que esa Parte haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de las enmiendas.

5. A los efectos de este artículo, por "Partes presentes y votantes" se entienden las Partes que estén presentes y emitan un voto afirmativo o negativo.



## ARTÍCULO 30. ADOPCIÓN Y ENMIENDA DE ANEXOS.

1. Los anexos del presente Convenio o de cualquier protocolo formarán parte integrante del Convenio o de dicho protocolo, según proceda, y, a menos que se disponga expresamente otra cosa, se entenderá que toda referencia al presente Convenio o sus protocolos atañe al mismo tiempo a cualquiera de los anexos. Esos anexos tratarán exclusivamente de cuestiones de procedimiento, científicas, técnicas y administrativas.

2. Salvo si se dispone otra cosa en cualquiera de los protocolos respecto de sus anexos, para la propuesta, adopción y entrada en vigor de anexos adicionales al presente Convenio o de anexos de un protocolo se seguirá el siguiente procedimiento:

a) Los anexos del presente Convenio y de cualquier protocolo se propondrán y adoptarán según el procedimiento prescrito en el artículo 29;

b) Toda Parte que no pueda aceptar un anexo adicional del presente Convenio o un anexo de cualquiera de los protocolos en que sea Parte, lo notificará por escrito al Depositario dentro del año siguiente a la fecha de la comunicación de la adopción por el Depositario. El Depositario comunicará sin demora a todas las Partes cualquier notificación recibida. Una Parte podrá en cualquier momento retirar una declaración anterior de objeción, y en tal caso los anexos entrarán en vigor respecto de dicha Parte, con sujeción a lo dispuesto en el apartado c) del presente artículo;

c) Al vencer el plazo de un año contado desde la fecha de la comunicación de la adopción por el Depositario, el anexo entrará en vigor para todas las Partes en el

presente Convenio o en el protocolo de que se trate que no hayan hecho una notificación de conformidad con lo dispuesto en el apartado b) de este párrafo.

3. La propuesta, adopción y entrada en vigor de enmiendas a los anexos del presente Convenio o de cualquier protocolo estarán sujetas al mismo procedimiento aplicado en el caso de la propuesta, adopción y entrada en vigor de anexos del Convenio o anexos de un protocolo.

4. Cuando un nuevo anexo o una enmienda a un anexo se relacione con una enmienda al presente Convenio o a cualquier protocolo, el nuevo anexo o el anexo modificado no entrará en vigor hasta que entre en vigor la enmienda al Convenio o al protocolo de que se trate.

#### ARTÍCULO 31. DERECHO DE VOTO.

1. Salvo lo dispuesto en el párrafo 2 de este artículo, cada una de las Partes Contratantes en el presente Convenio o en cualquier protocolo tendrá un voto.

2. Las organizaciones de integración económica regional ejercerán su derecho de voto, en asuntos de su competencia, con un número de votos igual al número de sus Estados Miembros que sean Partes Contratantes en el presente Convenio o en el protocolo pertinente. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.

## ARTÍCULO 32. RELACIÓN ENTRE EL PRESENTE CONVENIO Y SUS PROTOCOLOS.

1. Un Estado o una organización de integración económica regional no podrá ser parte en un protocolo a menos que sea, o se haga al mismo tiempo, Parte Contratante en el presente Convenio.

2. Las decisiones relativas a cualquier protocolo sólo podrán ser adoptadas por las Partes en el Protocolo de que se trate. Cualquier Parte Contratante que no haya ratificado, aceptado o aprobado un protocolo podrá participar como observadora en cualquier reunión de las Partes en ese protocolo.

ARTÍCULO 33. FIRMA. El Presente Convenio estará abierto a la firma en Río de Janeiro para todos los Estados y para cualquier organización de integración económica regional desde el 5 de junio de 1992 hasta el 14 de junio de 1992, y en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, desde el 15 de junio de 1992 hasta el 4 de junio de 1993.

## ARTÍCULO 34. RATIFICACIÓN, ACEPTACIÓN O APROBACIÓN.

1. El presente Convenio y cualquier protocolo estarán sujetos a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados y por las organizaciones de integración económica regional. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del Depositario.

2. Toda organización de las que se mencionan en el párrafo 1 de este artículo que pase a ser Parte Contratante en el presente Convenio o en cualquier protocolo, sin que sean Partes Contratantes en ellos sus Estados Miembros, quedará vinculada por todas las obligaciones contraídas en virtud del Convenio o del protocolo,

según corresponda. En el caso de dichas organizaciones, cuando uno o varios de sus Estados miembros sean Partes Contratantes en el presente Convenio o en el protocolo pertinente, la organización y sus Estados miembros decidirán acerca de sus responsabilidades respectivas en cuanto al cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del Convenio o del protocolo, según corresponda. En tales casos, la organización y los Estados Miembros no estarán facultados para ejercer concurrentemente los derechos previstos en el presente Convenio o en el protocolo pertinente.

3. En sus instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación, las organizaciones mencionadas en el párrafo 1 de este artículo declararán el ámbito de su competencia con respecto a las materias reguladas por el presente Convenio o por el protocolo pertinente. Esas organizaciones también informarán al Depositario sobre cualquier modificación pertinente del ámbito de su competencia.

#### ARTÍCULO 35. ADHESIÓN.

1. El presente Convenio y cualquier protocolo estarán abiertos a la adhesión de los Estados y de las organizaciones de integración económica regional a partir de la fecha en que expire el plazo para la firma del Convenio o del protocolo pertinente. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Depositario.

2. En sus instrumentos de adhesión, las organizaciones a que se hace referencia en el párrafo 1 de este artículo declararán el ámbito de su competencia con respecto a las materias reguladas por el presente Convenio o por el protocolo pertinente. Esas organizaciones también informarán al Depositario sobre cualquier modificación pertinente del ámbito de su competencia.

3. Las disposiciones del párrafo 2 del artículo 34 se aplicarán a las organizaciones de integración económica regional que se adhieran al presente Convenio o a cualquier protocolo.

#### ARTÍCULO 36. ENTRADA EN VIGOR.

1. El presente Convenio entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que haya sido depositado el trigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

2. Todo protocolo entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que haya sido depositado el número de instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión estipulado en dicho protocolo.

3. Respecto de cada Parte Contratante que ratifique, acepte o apruebe el presente Convenio o que se adhiera a él después de haber sido depositado el trigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el Convenio entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que dicha Parte haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

4. Todo protocolo, salvo que en él se disponga otra cosa, entrará en vigor para la Parte Contratante que lo ratifique, acepte o apruebe o que se adhiera a él después de su entrada en vigor conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 de este artículo el nonagésimo días después de la fecha en que dicha Parte Contratante deposite su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación a adhesión, o en la fecha en que el presente Convenio entre en vigor para esa Parte Contratante, si esta segunda fecha fuere posterior.

5. A los efectos de los párrafos 1 y 2 de este artículo, los instrumentos depositados por una organización de integración económica regional no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados Miembros de tal organización.

ARTÍCULO 37. RESERVAS. No se podrán formular reservas al presente Convenio.

ARTÍCULO 38. DENUNCIA.

1. En cualquier momento después de la expiración de un plazo de dos años contado desde la fecha de entrada en vigor de este Convenio para una Parte Contratante, esa Parte Contratante podrá denunciar el Convenio mediante notificación por escrito al Depositario.

2. Esa denuncia será efectiva después de la expiración de un plazo de un año contado desde la fecha en que el Depositario haya recibido la notificación, o en una fecha posterior que se haya especificado en la notificación de la denuncia.

3. Se considerará que cualquier Parte Contratante que denuncie el presente Convenio denuncia también los protocolos en los que es parte.

ARTÍCULO 39. DISPOSICIONES FINANCIERAS PROVISIONALES. A condición de que se haya reestructurado plenamente, de conformidad con las disposiciones del artículo 21, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, será la estructura institucional a que se hace referencia en el artículo 21 durante el período comprendido entre la entrada en vigor del presente Convenio y la primera

reunión de la Conferencia de las Partes, o hasta que la Conferencia de las Partes decida establecer una estructura institucional de conformidad con el artículo 21.

ARTÍCULO 40. ARREGLOS PROVISIONALES DE SECRETARÍA. La Secretaría a que se hace referencia en el párrafo 2 del artículo 24 será, con carácter provisional, desde la entrada en vigor del presente Convenio hasta la primera reunión de la Conferencia de las Partes, la Secretaría que al efecto establezca el Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

ARTÍCULO 41. DEPOSITARIO. El Secretario General de las Naciones Unidas asumirá las funciones de Depositario del presente Convenio y de cualesquiera protocolos.

ARTÍCULO 42. TEXTOS AUTÉNTICOS. El original del presente Convenio, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

En testimonio de lo cual, los infrascritos,  
debidamente autorizados a ese  
efecto, firman el presente Convenio.

Hecho en Río de Janeiro el cinco de junio  
de mil novecientos noventa y dos.

#### ANEXO I.

#### IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

1. Ecosistemas y hábitats que: contengan una gran diversidad, un gran número de especies endémicas o en peligro, o vida silvestre; sean necesarios para las

especies migratorias; tengan importancia social, económica, cultural o científica; o sean representativos o singulares o estén vinculados a procesos de evolución u otros procesos biológicos de importancia esencial;

2. Especies y comunidades que: estén amenazadas; sean especies silvestres emparentadas con especies domesticadas o cultivadas; tengan valor medicinal o agrícola o valor económico de otra índole; tengan importancia social, científica o cultural; o sean importantes para investigaciones sobre la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, como las especies características; y

3. Descripción de genomas y genes de importancia social, científica o económica.



## **BIBLIOGRAFÍA**

Asibey, E.A.O. 1987. Wildlife issues in Sub-Saharan Africa. En International Symposium and Conference on Wildlife Management in Sub-Saharan Africa - Sustainable Economic Benefits and Contribution towards Rural Development, 6-13 de octubre de 1987, Harare, Zimbabwe, págs. 32-45.

Brard, L. 1999. La réparation des dommages. En Société Française pour le Droit de l'Environnement, La chasse en droit comparé. Actes du Colloque organisé au Palais de l'Europe, à Strasbourg, les 9 et 10 novembre 1995, L'Harmattan, París/Montreal, págs. 155-182.

Bouckaert, J. 1999. Les territoires de chasse et les habitats. En Société Française pour le Droit de l'Environnement, La chasse en droit comparé. Actes du Colloque organisé au Palais de l'Europe, à Strasbourg, les 9 et 10 novembre 1995, L'Harmattan, París/Montreal, págs. 77-117.

Brynaert, K.A. & Kazell, S.D. 1987. The value of wildlife in Canada: a paradox. En International Symposium and Conference on Wildlife Management in Sub-Saharan Africa - Sustainable Economic Benefits and Contribution towards Rural Development, 6-13 de octubre de 1987, Harare, Zimbabwe, págs. 297-305.

Burhenne, W.E., 1999. Le droit de la chasse en Allemagne et en Autriche. En Société Française pour le Droit de l'Environnement, La chasse en droit comparé. Actes du Colloque organisé au Palais de l'Europe, à Strasbourg, les 9 et 10 novembre 1995, L'Harmattan, París/Montreal, págs. 185-191.

Chardonnet, P. (éd.) 1995. Faune sauvage africaine - La ressource oubliée. Fondation internationale pour la sauvegarde de la faune/Département d'élevage et de médecine vétérinaire. CIRAD-EMVT. Comisión Europea, 396 págs.

Child, G.S. 1992. Institutional aspects of wildlife management, with special reference to Africa. En Wegge, P. (ed.). Mammal Conservation in Developing Countries - A New Approach. Proceedings of a Workshop held at the 5th Theriological Congress in Rome, Italy, August 1989. NLH Agricultural University of Norway, Development and Environment N° 11, NORAGRIC Occasional Paper Series C, págs. 72-76.

Christy, L.C. 2000. International Wildlife Agreements. En Provincia di Pesaro e Urbino, Actas del taller A Consultative Process on Wildlife Management Legislation. Pesaro-Urbino, Italia, 28-30 de septiembre de 2000, págs. 27-40.

Crowe, D.M. 1987. Optimizing Wildlife Harvest and the Apportionment Benefits. En International Symposium and Conference on wildlife management in Sub-Saharan Africa - Sustainable Economic Benefits and Contribution towards Rural Development, 6-13 de octubre de 1987, Harare, Zimbabwe, págs. 209-217.

De Klemm, C. 1999. Les sources internationales du droit de la chasse. En Société Française pour le Droit de l'Environnement, La chasse en droit comparé. Actes du Colloque organisé au Palais de l'Europe, à Strasbourg, les 9 et 10 novembre 1995, L'Harmattan, París/Montreal, págs. 23-52.

Du Saussay, C. 2000. La protection de la biodiversité dans le droit français. En Provincia di Pesaro e Urbino, Actas del taller A Consultative Process on Wildlife Management Legislation. Pesaro-Urbino, Italia, 28-30 de septiembre de 2000, págs. 113-135.

Egbe, E.S. 2001a. The Law, Communities and Wildlife Management in Cameroon. Network Paper, Rural Development and Forestry Network, ODI, N° 25e, págs. 1-12.

Egbe, E.S. 2001b. The Legal Perspectives of Local Community Participation in Wildlife Management in Cameroon. En *Verfassungs und Rechts in Übersee* 34:1, págs. 63-81.

FAO. 1980. Legislación sobre fauna, caza y áreas protegidas en algunos países europeos, por C. Du Saussay. FAO, Estudio legislativo N° 20. Roma, 49 págs.

FAO. 1984. Legislation on Wildlife and Protected Areas in Africa, por C. Du Saussay. FAO, Estudio legislativo N° 25. Roma, 158 págs.

FAO. 2001. Tendances d'évolution du droit de la faune et des aires protégées en Afrique occidentale, por I. Ly. Estudio legislativo de la FAO en línea N° 13 ([www.fao.org/Legal](http://www.fao.org/Legal) <http://www.fao.org/Legal>).

Guibert, B. 2000. La chasse en France: cadre législatif et réglementaire. En Provincia di Pesaro e Urbino, Actas del taller A Consultative Process on Wildlife Management Legislation. Pesaro-Urbino, Italia, 28-30 de septiembre de 2000, págs. 87-94.

Harrop, S.R. 1999. Conservation Regulation: A Backward Step for Biodiversity? En *Biodiversity and Conservation* 8, págs. 679-707.

Harrop, S.R. 2000. The UK's Implementation of EU Legislation on Wildlife Management. En Provincia di Pesaro e Urbino, Actas del taller A Consultative

Process on Wildlife Management Legislation. Pesaro-Urbino, Italia, 28-30 de septiembre de 2000, págs. 163-171.

Infield, M. 1992. The Importance of Hunting in the Conservation of Large Mammals: A Case Study in Korup National Park, Cameroon. En Wegge, P. (ed.). Mammal Conservation in Developing Countries - A New Approach. Proceedings of a Workshop held at the 5th Theriological Congress in Rome, Italy, August 1989. NLH Agricultural University of Norway, Development and Environment N° 11, NORAGRIC Occasional Paper Series C, págs. 106-121.

Kenya Wildlife Fund Trustees and United Nations Environment Programme, 1988. People, Parks and Wildlife. UNEP, Nairobi.

Kalèn, C. & Trägårdh, N. 1998. Sustainable Use of Wildlife - A Case Study from the Campfire Programme in Zimbabwe. Swedish University of Agricultural Sciences, Minor Field Studies N° 40, Uppsala, 91 págs.

Matos, R. & Pereira, M.J. 2000. Portuguese Wildlife Legislation. En Provincia di Pesaro e Urbino, Actas del taller A Consultative Process on Wildlife Management Legislation. Pesaro-Urbino, Italia, 28-30 de septiembre de 2000, págs. 137-148.

Mekouar, M.A. 1999. Le droit de la chasse au Maroc. En Société Française pour le Droit de l'Environnement, La chasse en droit comparé. Actes du Colloque organisé au Palais de l'Europe, à Strasbourg, les 9 et 10 novembre 1995, L'Harmattan, París/Montreal, págs. 251-270.

Mishra, H.R., Wemmer, C., Smith, J.L.D. & Wegge, P. 1992. Biopolitics of Saving Asian Mammals in the Wild: Balancing Conservation with Human Needs in Nepal. En Wegge, P. (ed.). Mammal Conservation in Developing Countries - A New

Approach. Proceedings of a Workshop held at the 5th Theriological Congress in Rome, Italy, August 1989. NLH Agricultural University of Norway, Development and Environment N° 11, NORAGRIC Occasional Paper Series C, págs. 9-35.

Munasinghe, M. & McNeely, J., (eds.). 1994. Protected Area Economics and Policy - Linking Conservation and Sustainable Development. Distribuido para la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) por el Banco Mundial, Washington, 11 págs.

Overseas Development Administration. 1996. African Wildlife Policy Consultation - Final Report of the Consultation. Sunningdale Park, Berskshire, Reino Unido, 18 y 19 de abril de 1996, 217 págs.

Parr, J. 2000. An Overview of Protected Area Regulations in Southeast Asia. Tigerpaper, Vol. 27 (2), págs. 18-23.

Pettiti, L. 2000. Direttive comunitarie per la tutela della fauna e rete Natura 2000. En Provincia di Pesaro e Urbino, Actas del taller A Consultative Process on Wildlife Management Legislation. Pesaro-Urbino, Italia, 28-30 de septiembre de 2000, págs. 75-86.

Pironio, E. 1987. Wildlife Utilization Planning in the Central African Republic. En International Symposium and Conference on Wildlife Management in Sub-Saharan Africa - Sustainable Economic Benefits and Contribution towards Rural Development, 6-13 de octubre de 1987, Harare, Zimbabwe, págs. 403-407.

Postiglione, A. 2001. Application de la Convention de Berne et législation relative à la conservation de la nature dans les Parties contractantes: compilation de références et résumés de décisions juridictionnelles nationales et communautaires.

En Giurisdizione e controllo per l'effettività del diritto umano all'ambiente - Giornata dell'ambiente 2000, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, págs. 183-221.

Procaccini, F. 2000. Effettiva applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo nel territorio dello Stato italiano. En Provincia di Pesaro e Urbino, Actas del taller A Consultative Process on Wildlife Management Legislation. Pesaro-Urbino, Italia, 28-30 de septiembre de 2000, págs. 233-237.

Späth, V. 2000. Conflicts between Traditional Hunting and Nature Conservation in Germany: Principles for Close-to-nature Hunting. En Provincia di Pesaro e Urbino, Actas del taller A Consultative Process on Wildlife Management Legislation. Pesaro-Urbino, Italia, 28-30 de septiembre de 2000, págs. 95-103.

Thelen, K.D. & van der Werf, N.G.C. 1995. Wildlife and Rural Development in Latin America. En World Animal Review, 2, págs. 40-46.

Townsend, M.H.C. 1987. Game Ranching and Farming in Zimbabwe. En International Symposium and Conference on Wildlife Management in Sub-Saharan Africa - Sustainable Economic Benefits and Contribution towards Rural Development, 6-13 de octubre de 1987, Harare, Zimbabwe, págs. 62-67.

Twyman, C. 1998. Rethinking Community Resource Management: Managing Resources or Managing People in Western Botswana? En Third World Quarterly, Vol. 19, N° 4, págs. 745-770.

Williams, A., Masoud, T. S. & Othman, W.J. 1998. Community-based Conservation: Experiences from Zanzibar. International Institute for Environment and Development, Gatekeeper Series N° 80, 15 págs.

Yaro, C.I. & Belemsobgo, C. U. 1987. Institutionalizing Village Hunting in Burkina Faso. En International Symposium and Conference on Wildlife Management in Sub-Saharan Africa - Sustainable Economic Benefits and Contribution towards Rural Development, 6-13 de octubre de 1987, Harare, Zimbabwe, págs. 393-402.

Zambotti, L. 2000. La legislazione italiana per la protezione della fauna selvatica. En Provincia di Pesaro e Urbino, Actas del taller A Consultative Process on Wildlife Management Legislation. Pesaro-Urbino, Italia, 28-30 de septiembre de 2000, págs. 195-206.